

No. 24

2026

En línea con la UNIDAD

de Investigación
y Acusación

Revista Virtual

La historia de Sandra Patricia
Castro, la mujer que convirtió el
dolor en liderazgo comunitario

52 testigos para
reconstruir la verdad
sobre 18 víctimas

El perdón que no
borra la verdad

Orfilia Urrea o la
infancia que la guerra
no pudo borrar

Y MUCHO
MÁS

Sandra Patricia Castro Bernal,
lideresa de Puerto Concordia, Meta.

Dirección UIA

Giovanni Álvarez Santoyo

Dirección Revista Virtual UIA

Jairo Alfonso Barón Hernández

Redacción e investigación

Jairo Alfonso Barón Hernández

Paola Hernández Peñuela

Libardo Cardona Martínez

Margarita Barreneche Ortiz

Luisa Robayo Acevedo

Ximena Bernal Ortiz

Mónica Julieta González Valcarcel

Helen Dayana Bohórquez Quintero

Angie Melissa Arévalo

Laura Valentina Rodríguez Montoya

Camila Villegas

Fotografía

Laura Valentina Rodríguez Montoya

Luisa Robayo Acevedo

Camila Villegas

Diseño y diagramación

Diego Alba Patiño

Colombia

2026

Marcela Bolaño, destacada lideresa wiwa del departamento del Cesar, quien ha acompañado a mujeres víctimas del conflicto armado en las denuncias ante la JEP.





Página 2



Página 6



Página 18



Página 22



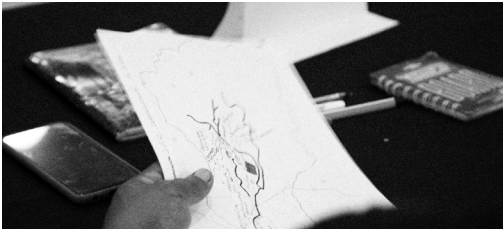
Página 26



Página 30



Página 34



Página 40



Página 42



Página 48

La historia de Sandra Patricia Castro,

la mujer que convirtió el dolor en liderazgo comunitario

Sandra Patricia Castro, la mujer de corazón enorme que venció la tragedia para convertirse en líderesa social de Puerto Concordia, Meta.

Durante buena parte de su vida, Sandra Patricia Castro Bernal no supo con certeza dónde había nacido. Tampoco conoció el significado de tener unos apellidos propios o de crecer en un hogar estable. El conflicto armado, el abandono, el desplazamiento, la falta de estudio y la pobreza marcaron su infancia y también su juventud.

“No distingo a mi mamá. No sé si ella me abandonó o murió”, le dijo Sandra Patricia hace poco al grupo de prensa de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP durante un encuentro con víctimas del conflicto armado en el municipio de Granada (Meta).

Sus apellidos —Castro Bernal— le fueron prestados por una mujer de Calamar (Guaviare) que, con la mejor fe del mundo, la hizo registrar como si fuera su hija. *“Son cosas duras y a la vez bonitas que le pasan a uno. Viví cosas muy bonitas con esa señora (Blanca Castro Bernal)”*.

Sin embargo, décadas después, esa misma mujer que recorrió sin rumbo los caminos del Meta y del Guaviare es hoy la presidenta de una junta de acción comunal y una de las líderesas sociales más

activas del municipio metense de Puerto Concordia.

Su historia es la de una sobreviviente que decidió transformar el sufrimiento en servicio hacia los demás. Sandra Patricia nació el 10 de junio de 1974, aunque aún desconoce con exactitud el lugar de su nacimiento. Se crio en la Sierra de La Macarena, junto a su padre, hasta que tenía unos seis o siete años.

De acuerdo con Sandra Patricia, la violencia obligó a su familia a abandonar las tierras donde vivían, en lo que hoy es el sector de Caño Losada, *“en un lote que —según dijo— era de mi papá, pero por causas de la violencia tuvo que desplazarse de allá”*.

Después quedó al cuidado de otra familia. Con ella empezó una etapa marcada por el maltrato y un sinfín de formas de violencia que la llevaron a abandonar esa casa. Tenía entonces 10 años.

“Sufrí mucho maltrato, mucha violencia. Sufrí varias cosas con esa familia (Sánchez Murillo), como violaciones”, indicó Sandra Patricia, quien luego de alejarse de la familia maltratadora se colocó en Villavicencio en la cocina de la casa de una pareja que durante un año le dio empleo.

Entonces se intensificó su calvario.

Sandra Patricia inició un largo recorrido por Miraflores, Calamar, Puerto López, Granada y otros municipios de los Llanos Orientales. Trabajó como empleada doméstica, vivió en condiciones de extrema pobreza y, siendo todavía menor de edad, terminó en la prostitución, impulsada seguramente por la pobreza y la falta de protección familiar.

“Uno comete muchos errores cuando no tiene un hogar”, aseguró la hoy lideresa, quien reconoció que esas equivocaciones juveniles —como la prostitución o la vida en la calle— obedecieron en gran parte a las malas compañías.

Finalizaban los años 80.

Con apenas 13 o 14 años llegó a trabajar a una finca en Miraflores (Guaviare). Allí cocinaba para trabajadores de cultivos de coca o los llamados raspachines. En ese trabajo duró cerca de nueve años. Fue una época atravesada por la presencia permanente de la guerra.

Sandra Patricia recuerda haber sobrevivido a varias tomas guerrilleras contra el mencionado municipio. *“Empezaba la balacera y cuando uno salía no encontraba sino muertos”,* explicó.

En Miraflores nacieron sus dos primeros hijos. Luego se trasladó a Calamar, también en Guaviare, donde volvió a empezar de cero. Allí conoció a quien sería el padre de otros dos de sus hijos. Pero nuevamente la violencia se ensañó en su vida.

A comienzos de la década del 2000 fue obligada a presentarse ante un grupo armado ilegal, luego de que el padre de sus hijos tuviera problemas con esa organización armada. El hombre se voló y, sin el visto bueno de la madre, se llevó a uno de sus hijos de tan solo cinco años.

Ella, mientras tanto, se presentó ante la guerrilla, permaneció retenida en el monte durante varios meses y fue víctima de graves atropellos. *“Allá padecí violaciones y cosas que no le deberían pasar a un ser humano porque es dañar su cuerpo, su mente, sus emociones”,* dijo.

De aquella época, igualmente, Sandra Patricia tiene una visión de la vida que aún la acompaña: *“He visto el odio que produce una guerra política. No les importa llevarse al que sea con tal de lograr sus objetivos”.*

Años después logró salir junto con dos de sus hijos y llegó a San José del Guaviare con una mano atrás y otra adelante. *“Llegué sin una cobija, con una maletica y dos bocas para mantener”,* recordó.

La lideresa Sandra Patricia Castro expone con sus compañeras de equipo durante el Encuentro Territorial de Participación Social desarrollado hace un par de meses en Granada, Meta.

Consiguió una habitación, empezó a trabajar en un restaurante y, poco a poco, comenzó a reconstruir su vida. Fue también allí donde encontró un nuevo camino en la religión.

Sandra Patricia asegura que la vida espiritual le permitió liberarse del rencor que durante años cargó por todas sus vicisitudes. *“Vivía llena de odio y me preguntaba por qué me había pasado todo eso. Dios me ayudó a sanar”.*

En San José del Guaviare conoció al hombre que hoy es su esposo. Con él formó un nuevo hogar y años después llegaron a la vereda Lindenal de Puerto Concordia.

Mientras su esposo trabajaba en labores rurales, Sandra abrió un pequeño negocio de arepas y empezó a involucrarse en los asuntos comunitarios.

Su liderazgo surgió casi de manera espontánea.

Participó en talleres, ingresó como vocal de la junta de acción comunal y lideró un proyecto que permitió dotar a la vereda de una biblioteca comunitaria.

Paradójicamente, la mujer que hoy representa a su comunidad aprendió a leer siendo adulta. Lo hizo en una finca, gracias a un trabajador de avanzada edad que llevaba siempre consigo una Biblia.

“Ese señor era evangélico y cargaba una Biblia grande. Era un buen hombre. Yo aprendí a leer en esa Biblia”, recordó con un dejo de nostalgia y a la vez con satisfacción.

Con el paso de los años, Sandra Patricia fortaleció su trabajo social. Participó en la creación de una asociación de comunidades afrodescendientes, hace parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Puerto Concordia y ha representado al municipio en encuentros nacionales sobre participación y género.



La activista Sandra Patricia Castro en compañía del jefe de la prensa de la UIA, Jairo Barón.



Sandra Patricia Castro, de 52 años, aún no tiene certeza dónde nació y qué fue de la vida de su madre.

Hace poco fue elegida presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lindenal. Es una responsabilidad que asume como una oportunidad para devolverle a su comunidad parte de lo que ella recibió durante su proceso de reconstrucción personal.

Entre sus principales metas están mejorar el alumbrado público, construir escenarios deportivos, impulsar nuevos proyectos comunitarios y seguir promoviendo la participación de las mujeres y de las víctimas del conflicto.

Sobre el proceso de paz en Colombia, sellado hace 10 años entre el gobierno nacional y las otrora FARC, Sandra Patricia considera que representa una oportunidad importante para el país, aunque cree

que la reconciliación requiere un reconocimiento sincero del daño causado por los victimarios y un compromiso verdadero con la no repetición.

Hoy, después de una vida marcada por el abandono, la guerra y múltiples pérdidas, Sandra Patricia asegura que su mayor motivación está en su familia, especialmente en una nieta que, según dice, “*le dio un sentido muy lindo*” a su vida.

Cuando habla del futuro ya no menciona el miedo que la acompañó durante tantos años. Más bien habla de esperanza. Y de seguir trabajando para que Lindenal sea un mejor lugar para vivir.

52 testigos para **reconstruir la verdad** sobre **18 víctimas**

El coronel (r) David Herley Guzmán, quien fue acusado en diciembre de 2024 por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP por los hechos de Dabeiba e Ituango.

Un poco menos de seis meses duró el juicio en contra del coronel (r) del Ejército Nacional David Herley Guzmán Ramírez, y ahora las partes tienen programado encontrarse en Medellín el 12 de agosto próximo para los alegatos de conclusión.

Fueron siete sesiones —seis en Bogotá y una en Medellín— en las que la Unidad de Investigación y Acusación presentó a 52 testigos con cuyas declaraciones la fiscal ante Tribunal Sandra Patricia Ramírez Montes aspira a que la Magistratura de la JEP condene a Guzmán Ramírez por delitos de lesa humanidad.

En diciembre de 2024, la Unidad de Investigación y Acusación

acusó al mencionado exoficial porque —en compañía de otros miembros de la fuerza pública y en asocio con organizaciones paramilitares del norte de Antioquia— presuntamente participó en la comisión de homicidios contra personas protegidas por el DIH, en desapariciones forzadas y, en algunos casos, en tratos crueles, humillantes y degradantes contra un sector de la población civil.

Los hechos por los que fue acusado ocurrieron entre 2004 y 2005 en los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango y ellos dan cuenta de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de 18 civiles (entre ellos cuatro menores de edad).

El juicio fue instalado en Medellín el 20 de enero pasado. Ese día, en su intervención, la fiscal Ramírez Montes calificó como *“un plan de terror operacional”* la actuación de los militares del Batallón Contraguerrilla 79 en contra de un sector de la población de Ituango y Dabeiba.

“Este juicio es, ante todo, un reconocimiento humano” para los familiares de las víctimas, agregó la funcionaria. *“La Fiscalía demostrará (a lo largo del juicio) quién debía morir y quién debía desaparecer”* desde la óptica de algunos integrantes de la unidad militar, añadió.

Durante cuatro días, Ramírez Montes demostró con pruebas testimoniales por qué Guzmán Ramírez fue acusado.

Para ello, la funcionaria presentó en la primera sesión del juicio a una docena de testigos (militares y civiles) que dejaron claro que el Batallón Contraguerrilla 79 —a cargo de Guzmán Ramírez— terminó convertido en un “grupo del terror” que, lejos de combatir a la delincuencia organizada, se cebó contra la población civil.

En esa primera sesión se habló extensamente de la desaparición y asesinato del campesino Rodrigo Humberto Torres, en noviembre de 2004.

Su historia fue contada por exmilitares como Fidel Iván Ochoa,

Anderson Aguinaga, Jorge Eliécer Barrientos y Ricardo Manuel Buelvas.

Así lo narraron:

Un informante o guía del Batallón Contraguerrilla 79, apodado “el Mocho”, les dijo a los militares que en el corregimiento El Aro de Ituango había un laboratorio de la guerrilla para el procesamiento de cocaína.

Entonces Guzmán Ramírez ordenó el operativo y que lo encabezara el suboficial Fidel Iván Ochoa. El objetivo era dar muerte a los guerrilleros que al parecer estaban en el laboratorio.

Toda vez que —según Barrientos— llegaron tarde al laboratorio, los presuntos rebeldes huyeron. Al final, dos hombres (que vivían en la zona) fueron retenidos por la tropa y llevados hasta el Alto del Oso. Eran Rodrigo Humberto Torres y Wilber Muñetón.

Ambos fueron entregados allí a los paramilitares.

Posteriormente, el entonces mayor Guzmán les llamó la atención a sus subalternos por haber hecho mal las cosas y, por radio, les dio la orden de regresar por uno de los hombres que había quedado en poder de los paramilitares.



Medellín, 28 de febrero de 2025. El director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, saluda a los familiares de Rodrigo Humberto Torres, quien fue asesinado por efectivos del Batallón Contraguerrilla 79.

La orden se cumplió, según los testigos. Rodrigo Humberto Torres les fue devuelto por los paramilitares a los militares y llevado al puesto de mando adelantado. Allí, Guzmán Ramírez dio la orden de dispararle. Primero el soldado Buelvas le disparó, pero no lo mató. Entonces el soldado Aguinaga lo remató con su arma.

Acto seguido, Guzmán Ramírez le dio la orden a Barrientos de que le disparara al cuerpo de la víctima. Pero el soldado no fue capaz de cumplir la orden.

“Usted lo que tiene es miedo, usted lo que está es cagao (sic)”, le dijo Guzmán a Barrientos.

La otra víctima de la retención ilegal, Wilber Muñetón, fue dejado en libertad por los paramilitares pocos días después.

Entre las víctimas presentes en la primera sesión del juicio contra Guzmán Ramírez estaba Amparo Cano Correa. Ella es la madre de Jhon Jarvi Cañas, un muchacho que presuntamente fue asesinado por Guzmán Ramírez.

Después de haber prestado el servicio militar obligatorio y procedente del corregimiento La Sierra, en el caluroso municipio antioqueño de Puerto Nare, Cañas llegó el martes 30 de agosto de

2005 a la terminal de transporte del norte de la capital antioqueña. Allí fue abordado por los entonces militares Jaime Coral y Fidel Iván Ochoa.

Vestidos de civil, los militares mencionados le prometieron a Cañas una inexistente oportunidad de trabajo en Dabeiba. El hombre, entonces de 25 años, se fue con ellos.

En la carretera entre Medellín y Dabeiba, un grupo de hombres armados interceptó a Cañas, a Coral y a Ochoa. Los tres fueron obligados a tirarse al suelo. Entonces —de acuerdo con la declaración que Coral y Ochoa entregaron a la JEP— apareció de repente Guzmán Ramírez, quien al parecer disparó contra Cañas.

“La justicia de Dios es muy linda y también estamos esperando la justicia terrenal, que (el asesino de su hijo) pague lo que tenga que pagar aquí y en la cárcel, como debe ser”, le dijo en su momento Amparo Cano al Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación y Acusación.

Sin embargo, ella no alberga odio en su corazón. Tan es así que hace rato perdonó al exmilitar Jaime Coral (hoy son amigos y a veces se saludan por teléfono) y estaría dispuesta a hacer lo mismo con el asesino de su hijo, *“pero siempre y cuando diga la verdad”*.





Doña Amparo Cano Correa, la madre de Jhon Jarvi Cañas, quien —según testigos— al parecer fue asesinado por el propio coronel David Guzmán Ramírez.



Doña Amparo Cano con su hijo Jhon Jarvi. Eran tiempos felices. Después vendría la tragedia.

El 24 de febrero, en Bogotá, se reanudó el juicio contra Guzmán Ramírez con la segunda sesión. De entrada, la Unidad de Investigación y Acusación presentó como testigo al exparamilitar Isaías Montes Hernández, alias “Junior”, quien fue segundo cabecilla del autodenominado Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Montes habló de su cercanía con el coronel Guzmán Ramírez y reveló la comisión de algunas ilicitudes perpetradas por los dos.

Por ejemplo, que muchas veces habló por teléfono con Guzmán Ramírez y que, en una oportunidad, incluso, tuvo retenidos a dos civiles por petición expresa del ex oficial. Uno de los dos civiles, posteriormente, fue devuelto a los militares vestido con camuflado (en referencia a Rodrigo Humberto Torres).

En la misma sesión, el otrora oficial Manuel Antonio Quintero Flórez relató cómo en julio de 2005 participó en un hecho en el que fueron asesinadas tres personas.

El primero en caer en manos de los integrantes del Batallón Contraguerrilla 79 fue Diofanor Guisao Ríos, quien fue sacado de noche de su casa en el corregimiento de Camparrusia de Dabeiba.

Era el lunes 11 de julio.

Luego, una menor de edad fue retenida cuando se transportaba en motocicleta a su lugar de trabajo en la carretera que comunica los municipios de Dabeiba y Uramita. Seneida, de 13 años, fue bajada del vehículo y retenida por personal armado y uniformado. Era el miércoles 13 de julio.



Los magistrados Reinere Jaramillo y Gustavo Salazar; de espalda, el coronel David Herley Guzmán.

Finalmente, Isidoro de Jesús Cardona fue secuestrado por tropas del batallón en la vía que comunica a las veredas Barrancas y Playones. Fue amarrado para ser transportado forzosamente, también el miércoles 13 de julio.

De acuerdo con Quintero Flórez, las tres personas fueron asesinadas en la finca Tamarindales. La orden fue impartida por Guzmán Ramírez.

Según el exsoldado José Rodolfo Correa, en 2004 fue asesinado por integrantes de la Compañía Brasil un hombre conocido con el alias de “el Mocho”, quien era guía del Ejército en los operativos contra las guerrillas en Ituango.

“Veníamos hacia Ituango, bajando en la patrulla, y se hace un simulacro de combate”, explicó Correa, quien advirtió que “el Mocho” había señalado a varias personas de pertenecer a las guerrillas.

“Él tenía mucha información”, dijo. Entonces, según Correa, se hizo un simulacro de combate. La orden de dar muerte a “el Mocho”

provino del propio Guzmán Ramírez, según le contó al soldado en mención el suboficial Fidel Ochoa.

El cadáver de “el Mocho” fue llevado a Ituango. Por participar en la muerte de “el Mocho”, Correa recibió un permiso de 20 días. “Por orden del mayor Guzmán, toda la compañía” recibió compensatorios, precisó.

Otro testigo, el exmilitar Edwin Alberto Cardona Arias, ratificó lo dicho por otros declarantes en relación con los asesinatos — en julio de 2004— de dos hombres y la adolescente Seneida. El testigo aseguró que los tres homicidios fueron ordenados por Guzmán Ramírez.

“Nada se hacía sin la orden de él”, indicó.

Cardona Arias también reveló que en el Batallón Contraguerrilla 79 se torturaba a los detenidos mediante “el bolsazo”, esto es, colocar una bolsa en la cabeza de la víctima para obligarla a entregar información.

La tercera sesión se desarrolló en Bogotá desde el 10 de marzo. En esa oportunidad, el primer testigo presentado fue el exparamilitar Javier Ocaris Correa, quien comandaba un bloque paramilitar en Dabeiba.

Para 2005, de acuerdo con el testigo, *“tuvimos una buena relación tanto con el Ejército como con la Policía”*.

En concreto, dijo el declarante, al menos en dos oportunidades *“me vi personalmente con el (entonces) mayor”* Guzmán Ramírez. Los presentó el sargento (r) Fidel Ochoa y *“conversábamos sobre la situación de la guerrilla”* en Dabeiba, precisó Javier Ocaris Correa.

Hacia 2007 o 2008 —indicó—, Guzmán Ramírez le habría mandado a decir con un militar que si lo denunciaba o lo implicaba en cualquier investigación judicial *“me mataba la familia”*.

En la tercera sesión también se presentó como testigo el exsuboficial Jaime Coral Trujillo, quien hizo una narración clara y precisa sobre la retención y posterior asesinato de los ciudadanos Jael Antonio

Góez y José Abdón George Mora.

Los hechos sucedieron en Ituango en septiembre de 2004. De la retención de estas personas, dijo Coral, tenía conocimiento Guzmán Ramírez.

El testigo aseguró que uno de sus compañeros (Holmes Barrera Rubio) les dijo que había recibido la orden de Guzmán Ramírez de asesinar a los dos retenidos.

La orden se cumplió.

Las víctimas (Jael Antonio Goez y José Abdón George Mora) fueron llevadas hasta Ituango para que la gente viera que las autoridades sí estaban dando resultados toda vez que, según Coral Trujillo, los dos muertos al parecer pertenecían a la otrora guerrilla de las FARC.

A la pregunta de cuál fue el rol de Guzmán Ramírez en la retención y posterior asesinato de los dos hombres, Coral respondió: *“Cien*



Javier Ocaris Correa, exparamilitar que comandaba un bloque paramilitar en Dabeiba. Según dijo en el juicio, recibió amenazas por parte de Guzmán Ramírez.

por ciento porque él era el comandante del batallón”.

Coral habló igualmente de los hechos que terminaron con el asesinato de un hombre el 22 de diciembre de 2004, en zona rural de Ituango. La orden de asesinar al supuesto informante la dio Guzmán Ramírez, según el declarante.

Y el mismo interrogante para Coral por parte de la Fiscalía de la JEP: ¿Qué responsabilidad tuvo Guzmán Ramírez en la retención y posterior asesinato de la víctima? *“Cien por ciento”,* respondió.

“En esa época era como ciego y pensaba que todo se estaba haciendo bien”, dijo Coral Trujillo cuando se le preguntó por qué había presentado un informe falso en el que daba cuenta de que la persona asesinada en diciembre de 2004, en el Alto del Burro, era un delincuente que había sido abatido en combate.

Coral confesó asimismo otro doble homicidio, perpetrado en enero de 2005, por orden de Guzmán Ramírez.

Eran dos personas que habían sido retenidas. Coral contó que les dio comida a quienes poco después serían sus víctimas y, según sus palabras, las dos personas se pusieron felices porque seguramente pensaron que les permitirían vivir.

Pero no fue así.

El propio Coral —previa orden de Guzmán Ramírez— les ordenó a sus soldados dispararles. Los hechos sucedieron en un sector conocido como La Cabaña, en la carretera que conduce hacia La Granja, rumbo a Ituango. Coral recibió como premio, por el doble asesinato, vacaciones y felicitaciones por parte de su superior: el entonces mayor Guzmán Ramírez.



El exsargento Jaime Coral Trujillo, testigo clave en el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez. La fotografía fue tomada durante una entrevista con el equipo de prensa de la UIA.



La fiscal ante Tribunal Sandra Patricia Ramírez Montes y su asistente Abraham Safar.

Sobre el asesinato del civil Jhon Jarvi Cañas (hijo de Amparo Cano Correa), el sargento Coral entregó en la audiencia información inédita.

Reveló que Guzmán Ramírez le había dado la orden a él y al también militar Fidel Ochoa de ubicar personas vulnerables para asesinarlas y mostrar inexistentes resultados operacionales.

Fue así como —según su relato— a finales de agosto de 2005 Coral y Ochoa ubicaron a Cañas en el terminal de transporte de Medellín. Lo vieron vulnerable. Estaba durmiendo. Seguramente el hambre lo había vencido.

De acuerdo con Coral, Ochoa le habló a Cañas, le ofreció comida, le dio dinero y le ofreció un inexistente trabajo en una despulpadora

de frutas en Dabeiba.

Cañas se animó y les dijo que sí. La orden que Guzmán le había dado a Ochoa era que, en la carretera, pararan donde vieran la tropa.

Así lo hicieron.

“Llegamos a un camino donde estaba el mayor (Guzmán Ramírez) y él le pegó un tiro en la cabeza al señor que traíamos del terminal” de Medellín, relató Coral Trujillo.

Minutos después —agregó Coral—, otros soldados sentaron el cadáver de Cañas y le dispararon de nuevo. Por orden de Guzmán, los documentos de Cañas fueron quemados y su cuerpo sin vida fue llevado a Carepa, Antioquia.

La cuarta sesión inició el 6 de abril con el testimonio del coronel (r) Olmes Rubio Barrera, quien —con el grado de teniente— laboró en el Batallón Contraguerrilla 79 al mando de Guzmán Ramírez (2004-2005).

Rubio Barrera entregó todos los detalles que terminaron con el asesinato de dos hombres que, en septiembre de 2004, en zona rural de Ituango, habían sido retenidos por el Batallón Contraguerrilla 79.

Yo *“recibo la orden de que había que darlos de baja porque eran bandidos”*, explicó Rubio Barrera, quien de inmediato enfatizó que la orden fue impartida por el comandante de la mencionada unidad

militar: David Guzmán Ramírez.

La orden se cumplió, advirtió Rubio Barrera. Un militar de apellido Beltrán le dijo en su momento que los dos hombres detenidos, que al parecer eran guerrilleros de las FARC, habían sido dados de baja.

En esa cuarta sesión también testificó el coronel (r) Ricardo Cuervo Montenegro, quien fue comandante de la Brigada Móvil 11 del Ejército, de la que hacía parte el Batallón Contraguerrilla 79.

Guzmán Ramírez tenía *“total autonomía”* para tomar las decisiones respecto de las operaciones que realizaba el Batallón Contraguerrilla 79, enfatizó el coronel Cuervo Montenegro.



El coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez estuvo al frente del Batallón Contraguerrilla 79 entre 2004 y 2005.



Los magistrados del juicio en la JEP contra Guzmán Ramírez. De izquierda a derecha, Raúl Sánchez, Reinere Jaramillo y Gustavo Salazar.

El 20 de abril último se llevó a cabo la quinta sesión del juicio. En esa oportunidad testificó el mayor (r) Jesús Fernando Cabrera Montánchez, quien laboró en el Batallón Contraguerrilla 79.

Cabrera Montánchez se refirió al hecho sucedido en Ituango, en octubre de 2004, en el que perdió la vida el joven Abraham González Torres, quien fue asesinado por personal al mando de Guzmán Ramírez.

González Torres tenía apenas 15 años.

De lo sucedido con González Torres —de acuerdo con Cabrera Montánchez— estaba al tanto el coronel Guzmán Ramírez.

“Él daba las órdenes”, indicó.

El testigo recordó que la víctima estaba herida al momento de ser asesinada. A pesar de esa situación, el testigo indicó que se le dio muerte porque *“eran las instrucciones en su momento”* y porque *“los resultados operacionales nuestros se medían por bajas”*.

El menor de edad permaneció desaparecido desde entonces, hasta que en marzo del año pasado la Unidad de Investigación y Acusación —con base en pruebas de ADN— entregó el cuerpo a la

familia González Torres.

En la quinta sesión también declaró Genny Elizabeth Apraez Villamarín, psicóloga y perita del Instituto Nacional de Medicina Legal y quien elaboró un peritaje conceptual sobre víctimas del Batallón Contraguerrilla 79 cuando —entre 2004 y 2005— era comandado por Guzmán Ramírez.

El peritaje conceptual tuvo como fin establecer si algunas de las víctimas fueron sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de integrantes de la mencionada unidad militar. Las conclusiones del informe fueron contundentes:

Primera, “que las circunstancias violentas que rodearon el asesinato de las víctimas (...) denotaban un escenario de tratos crueles, inhumanos y degradantes que causaron intencionalmente sufrimientos físicos y psíquicos a quienes para (ese) momento se hallaban bajo la custodia de agentes del Estado”.

Segunda, “que los tratos que se documentaron en la información disponible para estudio... (eran) contrarios a la salvaguarda de la integridad, la dignidad y la libertad personal de las víctimas al interior de un escenario torturante”.

Tercera, “que las víctimas identificadas en el caso se encontraban en circunstancias especiales de vulnerabilidad”, no obstante ser personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

También declaró en la quinta sesión el exsoldado profesional Wilson Chacón, quien fue interrogado por un hecho ocurrido en octubre de 2004 —en zona rural de Ituango— y en el que fue asesinado por militares el joven Abraham González Torres.

El testigo recordó que González Torres alcanzó a subir uno de sus brazos y a gritarles a los militares: “No disparen, no tengo nada”.

Sin embargo, los uniformados invadidos por el pánico —de acuerdo con Chacón— le dispararon al muchacho de 15 años y le causaron la muerte.

Según Chacón, el premio para los militares que participaron en el operativo no se hizo esperar: varios días de descanso.

El 25 de mayo se cumplió la sexta sesión del juicio contra Guzmán Ramírez. Ese día intervino el experto de la Unidad de Investigación y Acusación Carlos Manuel Bacigalupo, quien explicó los resultados del análisis forense realizado a los cuerpos examinados de las víctimas y la secuencia de los distintos eventos asociados a los hechos investigados.

Durante su intervención, Bacigalupo expuso los hallazgos correspondientes a las víctimas Abraham González Torres y Rodrigo Humberto Torres, cuyas identidades ya habían sido plenamente establecidas por el equipo forense de la UIA.

Finalmente, el 7 de julio —con la séptima sesión— concluyó la práctica de pruebas del juicio oral que la JEP adelanta en contra de Guzmán Ramírez.

La defensa solo presentó un testigo, el coronel Epimenio Cristiano Calderón, quien también fue contrainterrogado por la fiscal Ramírez Montes sobre el asesinato del joven Abraham González Torres.



En primer plano, el coronel David Herley Guzmán, excomandante del Batallón Contraguerrilla 79, en compañía de sus abogados.



La fiscal ante Tribunal Sandra Patricia Ramírez Montes, a principios de 2025, durante la entrega digna a sus familiares del cuerpo del joven Abraham González Torres.



El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli (primero a la derecha), encabezó hace dos años el acto de entrega digna del cuerpo de Jhon Jarvi Cañas en la Casa de Espiritualidad Monticelo, en Medellín. A su lado, doña Amparo Cano, la madre del joven asesinado por militares.

El perdón que no borra la verdad



A Lauro Rafael Maestre le mataron a su hermano menor, Víctor Hugo, un joven kankuamo ejecutado por el Ejército en Atánquez en 2004 y presentado como un falso positivo.

Lauro Rafael Maestre Rodríguez perdonó a los soldados que mataron a su hermano. Su hermana, en cambio, no ha podido. *“Ella dice que no los perdona y yo no le puedo cambiar la mentalidad”*, cuenta él, sin reproche.

A Lauro el perdón le llegó por la vía de la fe *“porque Dios me dio el perdón a mí”*, dice este hombre kankuamo de 51 años creyente evangélico en entrevista con el Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la UIA durante una jornada en Valledupar.

“Él dice que de la manera que nos perdonó a nosotros, así también debemos hacerlo. Eso me ha ayudado a sanar, a estar tranquilo”, agrega.

Su hermano menor, Víctor Hugo Maestre Rodríguez —el último de 10 hijos—, fue asesinado en octubre de 2004 cuando iba a cumplir 24 años, en Atánquez, la comunidad kankuama de la Sierra Nevada, y presentado por el Ejército Nacional como un guerrillero dado de baja en combate.

Es uno de los casos de muertes ilegítimamente presentadas como ejecuciones extrajudiciales —llamados ‘falsos positivos’— que la Jurisdicción Especial para la Paz examina en el macro caso 03. El de Víctor Hugo pertenece al proceso por el que la JEP acusó y condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía.

Atánquez fue, durante los primeros años de vida de Lauro, un lugar sin sobresaltos. *“No había violencia, uno andaba libre, iba al río, podía jugar en la calle”,* recuerda.

Fueron 10 hermanos —siete mujeres y tres hombres—. Él es el sexto. El padre trabajaba la agricultura y la madre tejía mochilas de fique, oficio de las mujeres kankuamas.

La pobreza era *“la de siempre”*: sembraban plátano, guineo y yuca, pero *“los recursos no alcanzaban para todos”*, así que los hermanos se turnaban los años de estudio, cediéndose el cupo uno al otro.

Entre la familia levantaron una casa de barro. Lauro dejó de estudiar y a los 15 años salió a jornalear por otras regiones. Nunca se fue del todo. En Atánquez ha vivido siempre. Allí formó su hogar: cuatro hijos y una hijastra que crio como propia.



Lauro Maestre perdonó a los soldados que mataron a su hermano “porque —según dijo— Dios me dio el perdón a mí”.

Hacia 2002, un combate hizo salir a la Policía del pueblo y Atánquez, que tiene una sola entrada, quedó *“a la deriva”*. Primero fue la guerrilla, que entraba y salía; después las autodefensas, que empezaron a bajar gente de los carros en un punto llamado *‘la entrada de los Corazones’*. Traían listas en mano. A quien figuraba en ellas, lo mataban.

El 31 de julio de 2003, la pesadilla le tocó la puerta a Lauro. Llegaron varios encapuchados, que dijeron del miembros del ELN, y preguntaron por Víctor Hugo, su hermano menor —al que la familia ya había sacado a Bogotá meses antes, precisamente porque lo buscaban—. Como no estaba se lo llevaron a él.

Lo llevaron a un sitio donde ya había gente detenida. Allí asesinaron a un hombre. Luego llegó el esposo de una de sus hermanas. Los apartaron a ambos y los llevaron hasta donde los esperaban otros hombres armados. Al cuñado lo señalaron de estar *“torcido”* y a Lauro le ordenaron marcharse.

“Yo no alcancé a presenciar la muerte de él —su cuñado—, pero sí me pedía ayuda, que hablara por él”, recuerda. Alcanzó a decirles que era un muchacho trabajador, que vivía con su hermana. No sirvió de nada.

Había caminado apenas 10 o 15 metros cuando oyó los disparos. Se escondió en el monte hasta que los hombres se fueron; el cuerpo, como siempre en Atánquez, tuvo que recogerlo la propia familia y buscarle una caja.

Poco después murió su padre. *“La enfermedad le llegó con la tristeza de esos días”,* dice Lauro.

Víctor Hugo volvió para el entierro de su padre y decidió quedarse a pesar del riesgo. Fue en esa época cuando el Ejército hizo presencia en el pueblo y corrió el rumor de que llegaban con lista en mano con los nombres de unos nueve jóvenes.

Entre esos nombres, se rumoraba, estaba el de Víctor Hugo. Su familia, confiando en la fuerza pública, optó por lo que parecía más seguro: presentarlo *“para ver cuál era el problema”*. Fueron su madre y una hermana, quienes se enteraron de que en la lista también estaba el nombre de Lauro.

Lauro se presentó y un soldado lo recibió diciendo que *“en Atánquez todos son milicianos”*. Un hombre encapuchado, sin embargo, negó con la cabeza al verlo y lo dejaron ir.

A Víctor Hugo y a otros cuatro jóvenes los retuvieron.

Llegaron entonces a un acuerdo: el Ejército no se los llevaría en helicóptero a Valledupar, como había amenazado, pero las familias debían presentarlos a diario y los muchachos tenían que hacer servicio social como barrer y limpiar las calles.

No podían salir después de las seis de la tarde. Vivían como presos: los raparon, los detenían, los humillaban y los tildaban de guerrilleros.

El 3 de octubre de 2004, un domingo, Víctor Hugo se puso un suéter verde nuevo que le había regalado su hermana, fue a misa con su madre y pasó el día visitando amigos. Al caer la tarde se cruzó con Lauro. *“Sabes que después de las seis no puedes estar por aquí”,* le advirtió.

El muchacho le pidió plata, pero Lauro no tenía. Le pidió entonces prestada la mochila para empeñarla y Lauro se la dio. Quedaron de verse en una fiesta. Se despidieron cerca de las 11 de la noche.

“Esa fue la última vez que nos vimos”, explica Lauro.

Víctor Hugo alcanzó a llegar a la casa de una de sus hermanas, comió y salió de nuevo hacia donde dormía. Cruzando un potrero, lo estaban esperando. Esa noche, hombres del Ejército Nacional —usando brazaletes del ELN— entraron al pueblo por los muchachos. Uno logró escapar; a otro, sus padres lo retuvieron en la casa con el argumento de que *“tendrán que matarlo aquí”*. Así que al único que pudieron llevarse fue a Víctor Hugo.

La familia lo buscó toda la noche hasta el día siguiente. El Ejército, que estaba en el pueblo, desapareció en ese momento. Cuando volvió dijo que había sido un grupo armado y que patrullaría. Lo tenían, en realidad, a 15 minutos, en una parcela.

Al anochecer, en el cerro que en Atánquez llaman ‘El Peligro’, la familia vio una luz de bengala y oyó descargas de fusil, *“como en un enfrentamiento”*. Se enteraron de todo y a la mañana siguiente un helicóptero se llevó el cuerpo. En Radio Guatapurí se escuchó el anuncio de que habían *“dado de baja a un subversivo”*.

Años después, en un encuentro ante la JEP, el cabo Elkin Rojas —quien confesó el asesinato— reveló el montaje. Antes de matarlo, contó, obligó al muchacho a ponerse un uniforme militar; le dio a elegir: o se lo ponía o lo desaparecían para que su familia jamás pudiera encontrarlo ni enterrarlo.

Víctor Hugo aceptó el uniforme.



En la JEP, Lauro halló un lugar para hablar, ser escuchado y conocer la verdad que durante años buscó.

Víctor Hugo no era ningún delincuente. Era un muchacho que esa misma semana había estado cogiendo café junto con Lauro para ayudar a pagar una tierra. Nunca se le vio un arma. Su familia denunció de inmediato y en 2005 la justicia ordinaria condenó a 11 militares por el crimen.

El perdón, sin embargo, no llegó por esa vía: se intentó un encuentro con las familias, pero los responsables *“pusieron mucho obstáculo”*.

El perdón llegó después con la JEP.

El encuentro con los comparecientes ocurrió hace tres años. Lauro y los suyos querían escuchar, saber los detalles que solo conoce quien cometió el delito y —como creyentes— no cargar con el rencor.

“Oírlos fue duro”, comenta Lauro. En el teniente Burgos —que mandaba en Atánquez y a quien en el pueblo se le temía— dice haber notado un arrepentimiento. En los otros militares no tanto.

Lauro perdonó incluso a los dos hombres del pueblo que, *“por una miseria”*, siguieron y señalaron a su hermano y que hoy lo saludan por la calle como si nada. Tampoco les guarda rencor a sus familias. *“Una mamá no manda a un hijo a hacer algo malo. La persona es la que toma las decisiones”*, dice.

De la JEP rescata lo que a las víctimas les faltó durante años: la posibilidad de hablar y de ser escuchadas. *“Uno puede decir las cosas, ha podido ser escuchado”*, afirma. Sabe que la institución no lo puede todo y pide comprensión para ella: *“Hay cosas que quisieran hacer —los servidores de la Jurisdicción—, pero no está a su alcance”*.

Su perdón no borra nada y él lo sabe. Es, más bien, la forma que encontró de no seguir haciéndose daño. *“Uno por dentro se daña, porque piensa siempre en lo malo”*, dice. *“Al estar en ciertos encuentros, uno reflexiona, piensa diferente, cambia de actitud”*.

Hoy su único deseo es que *“ojalá ellos —los comparecientes—, delante de Dios, se arrepientan de verdad, de corazón”*.

Orfilia Urrea

o la infancia
que la guerra
no pudo borrar



Orfilia Urrea, una mujer sufrida como la que más, pero valiente como pocos.

Ni un solo día de la infancia de Orfilia Urrea Salcedo fue fácil. A pesar de haber tenido unos padres y unos hermanos buenos y cariñosos, la guerra se cebó con ella y con su familia y hoy, a sus 34 años, carga con secuelas que el tiempo apenas ha logrado atenuar y que parecen imposibles de borrar.

“La infancia de nosotros fue con mucha guerra”, le dijo hace poco Orfilia al Grupo de Relacionamento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP durante un evento con víctimas del conflicto armado en el suroriente del departamento del Meta.

“Desde que tuvimos uso de razón, nos tocó vivir pendientes de los bombardeos, de las bombas que ponían en las escuelas, de la balacera que comenzaba cuando estábamos jugando afuera de la casa”, añadió la valiente mujer que nació en la localidad metense de Puerto Rico y fue la menor de ocho hermanos.

Cuando tenía ocho años, la guerra entró de lleno en su casa.

Su padre, Aldemar Urrea, cruzó el río Ariari con el fin de regar unas matas de borojó en una pequeña finca de su propiedad. Pero se le atravesó la tragedia y pisó una mina antipersonal.

“Él se vio bañado en sangre y le pidió a Dios que, antes de morir, le dejara ver a sus hijas. Se arrastró solo hasta la orilla del río y empezó a llamar a mi hermana Ruth”, relató Orfilia, quien es la madre de dos hijas que, según sus palabras, son la razón de su vida y de sus luchas.

Pero antes que Ruth, Orfilia se percató del accidente que había tenido su padre. Entonces apareció un hombre al que le decían “Papelao”, quien como pudo acomodó al moribundo Aldemar Urrea en una canoa.

“Cuando yo me acerqué a mi papá, se le veían los huesos de los pies pelados, de lado a lado”, explicó Orfilia, quien a renglón seguido se lamentó de la mala fe de algunas personas de Puerto Rico con el percance de su progenitor.

“No faltó quien dijera —contó Orfilia— que era que mi papá estaba poniendo una bomba” y que por eso la explosión que casi le cuesta la vida.

A pesar de la salud precaria con que quedó Aldemar Urrea

tras la explosión ocasionada por la mina antipersonal, la familia de Orfilia siguió luchando la vida y con la esperanza de tiempos mejores.

¡Qué equivocada estaba!

Una mañana de 2004, en un paraje rural de Puerto Rico conocido como El Darién, los padres de Orfilia se fueron a trabajar y la dejaron sola en la casa con su hermana Ruth, quien es mayor que ella un par de años.

En esa oportunidad, añadió Orfilia, *“fue cuando nos hicieron daño a mi hermana y a mí. Mi hermana Ruth y yo fuimos perjudicadas. (Los agresores) eran de la guerrilla. Aprovecharon que nosotras estábamos solas. Llegaron cuatro muchachos (guerrilleros) y pasó lo que pasó. Le taparon la boca a mi hermana. Yo vi todo. Después me cogieron a mí y me hicieron lo mismo”.*

Doña Rubiela, una vecina de los Urrea, se percató de lo sucedido y corrió a socorrer a Orfilia y a Ruth. Fue una tragedia con un elemento adicional: el obligado silencio.

Orfilia Urrea, durante la sentida entrevista que le concedió al equipo de prensa de la UIA en Granada, Meta.



Los padres de las chiquillas abusadas entendieron que no tenían ante quien denunciar y que si lo intentaban la respuesta de la guerrilla sería peor contra la familia.

Entonces los Urrea abandonaron El Darién y se instalaron en la cabecera municipal de Puerto Rico. Poco después, lleno de pavor, Aldemar Urrea se vino con sus familiares a vivir al barrio El Uval de Bogotá. No se amañaron un solo día de los seis meses que duró su estancia en la capital colombiana.

“En Bogotá hacía mucho frío”, recordó Orfilia, quien de inmediato llamó la atención sobre las bondades del clima cálido de casi todos los pueblos de su natal Meta.

De nuevo en Puerto Rico, y en una lucha en solitario contra los demonios que le dejó el abuso del que fue víctima, Orfilia se le paró de frente a la vida.

Lo primero que hizo fue estudiar para mantener su mente ocupada. Terminó el bachillerato y después —gracias a varias becas por ser una magnífica estudiante— se graduó como contadora pública en la Universidad de los Llanos de Villavicencio.

De eso hace seis años y desde entonces Orfilia no ha dejado de crecer. Un crecimiento que ha ido de la mano de sus cualidades como lideresa. Ella entendió que la mejor terapia para vencer los problemas de tiempos pasados era interactuando con otras víctimas del conflicto armado.

Entonces —junto con su hermano Luigui— se hizo miembro de una asociación llamada Adespropaz que, en la actualidad, reúne a unas 1.800 mujeres y hombres de los Llanos. Todos son desplazados, integrantes de la población LGBTI, víctimas del conflicto armado, en fin, personas vulnerables.

“Hemos sacado proyectos buenos”, recalcó con satisfacción Orfilia, quien en este momento es la secretaria de Adespropaz.

Allí ha escuchado decenas de historias relacionadas con la violencia, muchas de ellas más tristes y lamentables que la suya. Como la de doña Jobita, una entrañable amiga de unos 50 años que aún llora por la muerte de su hija.

“La historia de Jobita —de acuerdo con el relato de Orfilia— fue así: Llegan unos hombres armados (de la guerrilla a su casa del municipio metense de Uribe). Cuando llegaron a hacerle eso (o a abusarla sexualmente), ella le dijo a su niña que corriera y la niña lo que hizo fue esconderse detrás de un palo de limón. Pero la niña pisó una bomba. La niña, herida, le decía a Jobita que no la dejara morir. Poco después la niña murió”.

Ni Jobita ha podido superar lo de su hija ni Orfilia ha olvidado lo que le sucedió hace 22 años cuando los cuatro guerrilleros llegaron a su casa en El Darién. Y seguramente nunca lo olvidará por las secuelas que quedaron en su cuerpo.

De lo que sí está segura Orfilia Urrea Salcedo es de que la vida no la derrotará. También sabe que sus dos hijas crecerán, estudiarán y llegarán a ser profesionales íntegras y ciudadanas de bien. Así será.



En cada una de sus presentaciones, durante el Encuentro Territorial de Participación Social en Granada, Orfilia Urrea se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros.



Orfilia Urrea entendió que la mejor terapia para vencer los problemas de tiempos pasados era interactuando con otras víctimas del conflicto armado.

Marcela Bolaño:

la voz de
quienes aún no
pueden hablar

“Yo tenía mucha facilidad para tomar la vocería en las comunidades. Eso no es muy común entre nuestras mujeres”, cuenta Marcela sobre el don que descubrió siendo muy joven.

Marcela Bolaño nació en Bogotá, pero —como ella misma lo dice— *“allá solo se quedó su ombligo”*. A los pocos días de nacer, su madre la subió a la Sierra Nevada, a Achintukua, en las estribaciones que el pueblo Wiwa reconoce como su capital, en jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira).

Desde entonces, comentó, *“crecí en los dos mundos”*: la lengua wiwa y el vallenato de Valledupar. Según recordó la hoy lideresa en entrevista con el Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la UIA, aprendió español *“bien, bien, bien, más o menos a los seis años”*.

En la cultura Wiwa, cuando nace una niña hereda la línea cultural de la madre. Marcela fue la única entre sus hermanos que heredó la lengua. Tiene 39 años y una historia que, en sus palabras, tiene *“más cuentos que los hermanos Grimm”*.

Cuando se le preguntó si tuvo una infancia feliz, no lo pensó dos veces. *“Ahí no hay felicidad”*, respondió. Para ella la felicidad hubiera sido otra cosa: *“Ver bien a mi mamá, que hubiéramos podido seguir subiendo a la comunidad, tener la libertad de recorrer territorios y conocer historias, sin las restricciones que hubo cuando se recrudeció la violencia”*.

El recrudecimiento tiene fecha. Entre 2002 y 2004, mientras Marcela cursaba el bachillerato en San Juan del Cesar, la guerra entró en su casa por todas las puertas a la vez.

Primero fue una tía, Edilma Loperena, que acababa de terminar un curso agropecuario y fue secuestrada por la guerrilla cuando salió a hacer sus prácticas en la comunidad de Potrerito.

Casi enseguida les llegó la noticia de que otra tía —dueña de una tienda, señalada de ser guerrillera— había sido víctima de un atentado con explosivos en su propia casa junto con sus hijos. Como represalia, les anunciaron que buscarían a toda la familia. Entonces empezaron las amenazas directas.

Por esos días circuló en el pueblo una consigna que Marcela no ha podido olvidar: *“Los niños buenos duermen temprano y los niños malos dormirán para siempre”*. Casi a diario había fusilamientos en un lugar al que la gente llamaba *‘la Puerta del Cielo’*. *“A las seis de la tarde el pueblo ya estaba solo”*, dijo.

Ella, que a veces regresaba tarde de sus trabajos escolares, corría por las calles vacías con el corazón desbocado: *“Yo decía: me van a matar, me van a matar”*. En casa la esperaba su madre asustada, que por cuidarla también la obligaba a llegar temprano. *“O me matan, o me da mi mamá mi garrotera”*, resumió al referirse a aquella forma de sobrevivir.

Su casa era rondada por turnos. En un horario la rodeaba la guerrilla; en otro, los paramilitares. Tocaban la puerta, caminaban sobre el techo, dejaban cartas donde detallaban cada paso que la familia daba.

Camino a la escuela, los retenes revisaban a los estudiantes uno por uno: *“Preguntaban apellidos y dejaban secuestrados o mataban ahí*

mismo a los compañeros por ser hijo de..., por tener tal apellido”.

Marcela vio a una compañera sacada del salón porque acababan de matarle a un hermano. Vio al colegio entrar en luto cuando, en un corregimiento cercano, los paramilitares acribillaron a un grupo de personas.

La tía dueña de la tienda, a quien creían muerta, reapareció un día: se había fugado por el monte con sus siete hijos y anduvo perdida varios días hasta llegar a la casa.

A Edilma, en cambio, la soltaron tiempo después; volvió deshecha, pues la habían trasladado de La Guajira al Cesar y a la Serranía del Perijá con los ojos vendados todo el tiempo.

Sobre las mujeres de su familia (su madre y sus tías) pesaba, además, un silencio impuesto: varias fueron víctimas de violencia sexual, pero —explicó— *“nunca se habló de eso porque siempre hubo un señalamiento: qué habrán hecho ellas para provocar a esos hombres”*.

Al hambre le puso palabras y una frase que a Marcela le duele hasta los tuétanos: *“Uno come para vivir, uno no vive para comer”*. Se la decían porque las raciones no daban para más: un desayuno a las 11 de la mañana, un almuerzo al caer la tarde y pare de contar.

La desnutrición dejó marcas en su cuerpo y en los de sus hermanos —tuvo su primera menstruación hasta los 16 años y arrastra migrañas desde los 14— y toda la familia vivió bajo el mismo techo. Su madre, sola tras dejar una relación por violencia intrafamiliar, cargaba con 15 personas y sin sustento.

Meses después, debido a la situación precaria, la violencia y las continuas amenazas, la familia dejó el pueblo y llegó desplazada a Valledupar, a empezar otra vez desde cero.

Marcela Bolaño dice que su vida ha sido tan agitada que tiene “más cuentos que los hermanos Grimm”.



En medio de todo, los hermanos Bolaño se aferraron a lo único que parecía una salida: el estudio. *“Siempre fuimos cobardes para otro tipo de dinámicas, como la droga y los grupos armados”*, afirmó.

En cambio se refugiaron en los libros, las enciclopedias, las películas, los juegos de mesa. Marcela era, además, la que siempre estaba en la obra de teatro, en la banda de la escuela, en el proyecto académico, en fin, en cualquier distracción que se le presentara.

Con el sueño de seguir estudiando, al salir del colegio buscó certificación de su organización Wiwa. Para obtenerla tuvo que trabajar un año caminando las comunidades.

Lo hizo en el punto más alto de la violencia. En los caminos encontraba casquillos de bala y, muchas veces, los líderes que la acompañaban desaparecían. *“Nosotros teníamos el balón aquí, detrás de la oreja”*, dijo, llevándose la mano a la nuca.

Durante un desplazamiento en Potrerito, unos hombres que se hacían pasar por mototaxistas la sentaron a advertirle: *“Deje a esa gente quieta que esa gente no es suya”*.

La organización fue tajante: si no asumía el trabajo, no habría certificación. No tenía opción. Se sentaba con los mamos a hacer trabajos espirituales y las aseguranzas —los hilos que, según la tradición wiwa, reciben el mal y se revientan cuando la amenaza es grave— se reventaban una tras otra.

Con la certificación en la mano, presentó el examen de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Pasó a Administración de Empresas. La Universidad la deslumbró: *“Yo dije: esto es una*

Colombia pequeña”.

Allí, dos lideresas indígenas —Alejandrina Pastor Gil, wiwa, y la reconocida dirigente arhuaca y embajadora Leonor Zalabata— la empujaron al activismo.

“Ponte la manta”, le decían.

A Marcela le daba pena, porque toda la vida le habían dicho que su cara no parecía indígena. La respuesta de ellas la marcó: *“Si tú sabes tu lengua, tú conoces el territorio. ¿Quién te tiene que venir a decir a ti que tú no eres?”*.

Entonces empezó a usar la manta. Y con la manta llegó la visibilidad: profesores, entrevistas, un mural con su rostro pintado, la etiqueta de *“primera mujer wiwa”* en las aulas de administración.

De aquello guarda una lucidez poco común sobre el modo en que las instituciones cuentan: *“Me da hasta pena la forma en que romantizaron mi historia. Es muy caricaturesca. No obedece a lo que en realidad sucedió”*.

No terminó esa carrera. En séptimo semestre, expuesta a amenazas en sus viajes por el país y estudiando algo que no le apasionaba, decidió parar. Años más tarde, ya en Valledupar y con un hijo, volvió a la universidad. Se decantó por la psicología —*“porque era algo social y me di cuenta de que era buena para eso”*—, una carrera que aún cursa a distancia, entre viaje y viaje a la Sierra.

“Me falta el cartón”, dijo.



La vocación había nacido antes en el trabajo con su comunidad, casi sin darse cuenta, el día en que descubrió que podía hablar. *“Yo tenía mucha facilidad para tomar la vocería en las comunidades, y eso no es muy común entre nuestras mujeres”,* explicó.

De esa facilidad para hablar hizo un oficio: ser *“la voz de aquellos que, por diferentes circunstancias, no pueden hablar”*.

Con el tiempo, esa voz recorrió el país. Como tallerista de la corporación de juristas indígenas Akubadaura ha llegado al Amazonas, al Guaviare, a Buenaventura, al Chocó, al Vaupés.

Junto a una antropóloga y una psicóloga diseñó fichas de cuidado psicoespiritual para la contención emocional de víctimas. La lideresa reconoció con honestidad el origen de todo: *“A partir del dolor. Si este tipo de situaciones no hubieran sucedido, quizás yo no me dedicaría a la defensa de los Derechos Humanos”*.

Hay una veta suya que desentona con tanta guerra: la música. Por el lado de su padre, Marcela pertenece a una de las dinastías más reconocidas del vallenato: la de los Bolaño —seis generaciones ininterrumpidas de acordeoneros que hoy cierra su propio hijo—. Ella es la excepción con el acordeón: *“Toco solo las palmas, pero*

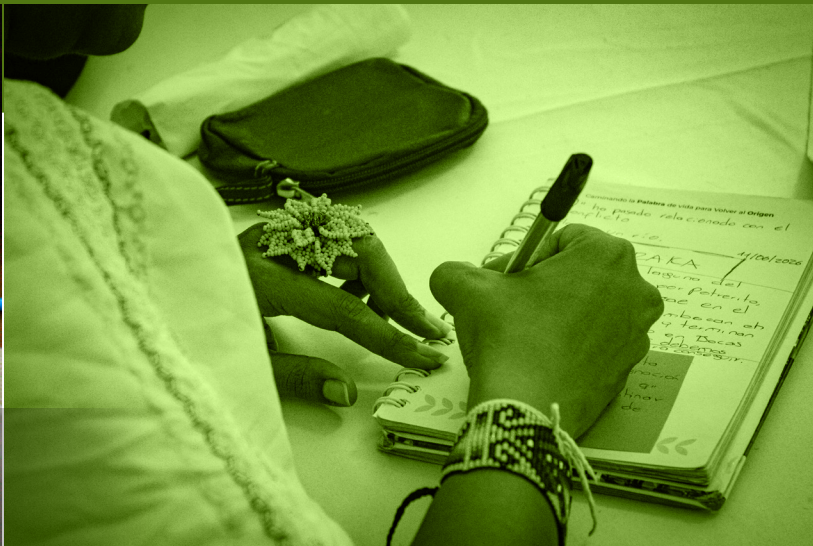
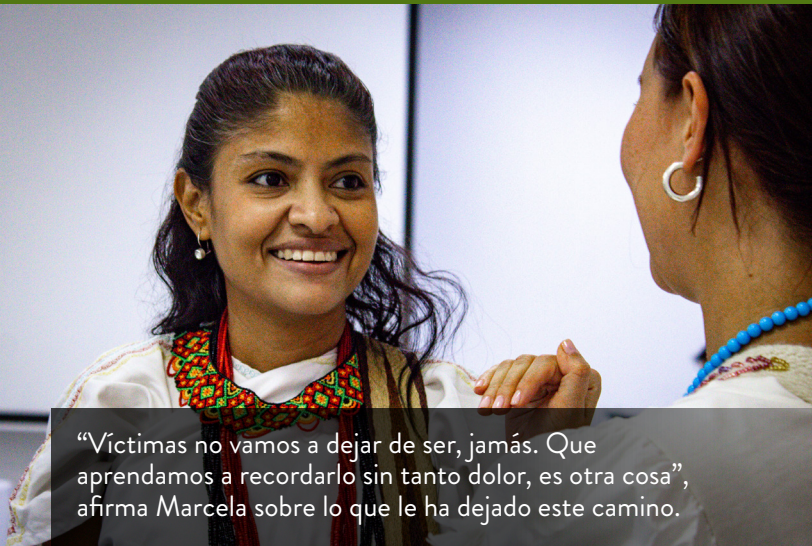
canto”. También escribe, un ejercicio que le gusta porque es *“sufrido y catártico a la vez”*.

A la Jurisdicción Especial para la Paz llegó por donde llega casi todo en su vida: por las mujeres. Una de ellas fue su propia tía: aquella joven secuestrada y violada por la guerrilla se convirtió, con los años, en lideresa de la Comisión de Mujeres del pueblo Wiwa, y fue ese trabajo el que terminó abriendo el camino de Marcela —y de otras— hacia la JEP.

Desde esa comisión empezó a acompañar a mujeres víctimas del conflicto, y el camino desembocó en los macro casos 03, 09 y 11. Hoy acompaña a las mujeres en las diligencias en las que los comparecientes rinden sus versiones. *“Qué cosa tan horrorosa”,* dice de esas jornadas.

Ella misma solo se atrevió a rendir su declaración en diciembre del año pasado, reconstruyendo fechas: cuándo secuestraron a su tía, cuándo llegaron las primeras cartas, cuándo la amenazaron a ella.

De su propia historia dice, con una precisión que estremece: *“Lo único que no me pasó fue violencia sexual. De resto, todo”*.



“Víctimas no vamos a dejar de ser, jamás. Que aprendamos a recordarlo sin tanto dolor, es otra cosa”, afirma Marcela sobre lo que le ha dejado este camino.

Durante el encuentro realizado en articulación con la UIA, FUPAD y la ART en Valledupar, una víctima asistente dijo entre risas que ya no deberían llamarse víctimas, porque se habían vuelto una familia con los comparecientes.

Marcela no estuvo de acuerdo. *“Mi cuerpo fue botín de guerra”,* respondió, hablando por ella y por las mujeres de su casa. *“Víctimas no vamos a dejar de ser, jamás. Que aprendamos a recordarlo sin tanto dolor, es otra cosa”*.

De la JEP rescata precisamente eso: un lugar donde, después de toda una vida de cargar estigmas, alguien por fin le dice *“Te creo”*.

“Eso es algo que nosotros teníamos toda una vida sin escuchar”, agregó. *“Que el victimario reconozca ‘nos equivocamos, hicimos*

esto’... Duele muchísimo, pero nos ayuda a darle un cierre a un capítulo tan terrible”, añadió.

No se hace ilusiones sobre una sanación total —*“lo vivido no se va a olvidar”*—, pero defiende con firmeza el valor de esos espacios, incluido el de escuchar a los responsables: *“El lobo siempre es malo si es Caperucita la única que habla”*.

Por eso insiste en que este es un trabajo que no puede desfallecer ni quedar atado al gobierno de turno. *“Colombia ha sido un país en el que sus tierras lloran la sangre inocente”,* enfatizó.

Pese a todo, ella sigue subiendo a la Sierra, sigue tomando la vocería y, lo más importante de todo, seguirá siendo la voz de los que aún no pueden hablar.

Cinco desapariciones y un perdón

En la mirada de María de Jesús Pabón habitan cinco ausencias, pero también la valentía de una mujer que decidió recorrer el camino del perdón.



Tener un familiar desaparecido es una tragedia. Es una incertidumbre que nunca termina. Pero perder el rastro de cinco seres queridos —entre ellos un hermano y un esposo—, personas que un día estuvieron presentes y al siguiente desaparecieron sin dejar rastro, es un dolor inconsolable, imposible de dimensionar.

Esa es la historia de María de Jesús Pabón Arias, una mujer a quien el conflicto armado le arrebató lo más valioso: gran parte de su familia.

Hoy tiene 63 años. Es la menor de siete hermanos y logró culminar su bachillerato hace apenas un par de años, en 2024.

Creció en una finca llamada ‘El Porvenir’, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Recuerda su infancia entre largas jornadas montando a caballo y cuidando el ganado.

Dice que, a diferencia de muchos hogares marcados por las dificultades, el suyo era un ejemplo de unión. Sus primeros años transcurrieron en una familia donde el amor y el trabajo compartido en actividades del campo hacían parte de la vida cotidiana.

Habla con especial cariño de su padre, un hombre amoroso que, por ella ser la menor, la convirtió en la consentida de la casa y procuró protegerla siempre. También recuerda a su hermano mayor, José de Jesús Pabón Arias, quien asumía el liderazgo familiar y administraba las finanzas de la casa. Esa responsabilidad terminó

convirtiéndolo en objetivo de quienes protagonizaban la guerra.

María de Jesús no creció temiéndole al conflicto armado. Por el contrario, durante su niñez normalizó la presencia de la guerrilla.

“Nosotros nos criamos en medio de la guerra”, sostiene María de Jesús durante una entrevista en Cúcuta con el equipo de prensa de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Los guerrilleros *“ayudaban a los campesinos a organizarse, arreglaban caminos, instalaron un puesto de salud en el pueblo. A mí, por ejemplo, me enseñaron primeros auxilios. Los guerrilleros del ELN patrullaban como el Ejército. Así que era normal verlos”,* cuenta.

Incluso recuerda un episodio en el que sintió que integrantes del ELN la protegieron. *“Cuando fue el matrimonio de mi hermana me dejaron sola en la casa, ordeñando vacas y dándoles comida a los marranos. La guerrilla pasó y le preguntó a mi papá para dónde iban. Después de que él les explicó, se quedaron prácticamente cuidándome. Hasta me ayudaban con los oficios de la casa, especialmente una mujer a la que le decían ‘la Chiqui’”.*

Aunque asegura que nunca sintió miedo de ese grupo armado, hubo otro actor del conflicto que sí terminó convirtiéndose en el protagonista de los dolores y sufrimientos más profundos de su vida.

El inicio del tormento

En 1990 comenzó su calvario.

Para entonces, María ya había conformado un hogar y se había trasladado al corregimiento de La Gabarra, donde trabajaba como comerciante de ropa y joyas de oro.

“A la gente que tenía negocio la extorsionaban los paramilitares. A ellos sí les tenía miedo. A mí me decían: ‘vienen los paracos’, y yo no hallaba qué hacer”.

Cuando recuerda la época del paramilitarismo, su voz cambia.

“Un día estaba en una residencia mostrando mi mercancía, como 15 millones de pesos en oro, cuando empezaron a sonar tiros por todos lados. Era una avanzada que entró matando a todos los comerciantes y vendedores ambulantes que encontraban”, relata con tono de suspenso.

“Yo me escondí durante horas en un baño. Cuando salí, me di cuenta de que habían matado a todos los que estaban allí. La sangre corría como corre el agua. Mis compañeros estaban muertos. Se llevaron todo lo material. Los mataban a tiros y también degollados”, añade.

Iniciaron las desapariciones forzadas

Su hermano mayor, José de Jesús Pabón Arias, fue el primero en desaparecer, en el municipio nortesantandereano de Tibú.

Según relata María de Jesús, integrantes de las autodefensas, identificados con los alias de “Moncholo”, “Jesubito”, “el Oso” y “ZC” lo obligaron a subir a una camioneta conocida como ‘la última

lagrima’. Lo llevaron hasta un banco para retirar todos sus ahorros y, desde ese momento, nunca más se supo de él.

Años después, con la entrada en vigor de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, comenzaron a conocerse las primeras versiones libres de excombatientes de grupos armados y exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes confesaron numerosos crímenes ante la justicia, rutas de operación, nexos y estructuras.

Fue entonces cuando María de Jesús supo parte de la verdad sobre su hermano.

“A mi hermano —sostiene— lo descuartizaron. Los asesinos confesaron que él era inocente, que no debía nada y que lo habían matado por equivocación. Pero nunca dijeron dónde dejaron su cuerpo.

“Contaron que mi hermano, herido, les suplicaba que lo dejaran libre, que mi mamá podía curarlo. También dijeron que cometían esas barbaridades borrachos y bajo los efectos de las drogas, y que por eso no recordaban el lugar exacto donde lo habían dejado”.

Era apenas el comienzo

Algo similar ocurrió con uno de sus primos, conocido como “Toñito”, quien una noche compartía unos tragos en una cantina de Tibú cuando hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta.

Nunca regresó.

Después desapareció su primo Silverio Buitrago, quien trabajaba en la finca de su padre. Hasta hoy no existe información sobre su paradero.



Los espacios ofrecidos por la UIA le han permitido comprender que siempre existen maneras de reconstruirse a partir de las heridas y las cicatrices que deja el conflicto.

La siguiente fue Elizabeth, una sobrina de María e Jesús. *“A ella se la llevaron del municipio de La Gabarra y no sabemos nada”.*

Su hermano, dos primos y una sobrina. Cuatro desapariciones. Pero la tragedia aún no había terminado.

La inconsolable desaparición de su esposo

En La Gabarra, donde vivía María de Jesús, patrullaban constantemente los paramilitares.

En 2002, su esposo salió de casa para llevarles comida a unos obreros que trabajaban en una finca cercana. De regreso a casa miembros de ese grupo ilegal lo retuvieron para nunca más regresarlo.

“Mi esposo —recuerda— estaba cerca porque yo escuché 11 disparos. Salí a buscarlo por todas las fincas y no lo encontré. Mis hijos, Agustín y Alejandra, de nueve y siete años en ese entonces, lo esperaban en la casa. Tenían lista una sopita caliente que yo había preparado. La sopa se quedó servida, esperándolo”.

Con la desaparición de su esposo ya eran cinco los seres queridos que el conflicto armado le había arrebatado. Pero el dolor no terminó allí.

Sus padres murieron consumidos por la angustia de preguntarse todos los días dónde estaba su hijo José de Jesús y qué había sido de sus familiares desaparecidos. Se fueron de este mundo sin

obtener una respuesta, llevaron el dolor hasta la muerte.

Las lágrimas que recorren el rostro de María de Jesús cada vez que revive esta historia tienen una razón de ser y suficiente peso. Sin embargo, también revelan la dimensión de una transformación que pocos podrían imaginar.

“Yo los perdoné”

Después de todo, María de Jesús tuvo que abandonar su tierra y comenzar de nuevo en Cúcuta.

“Llegué con mucho dolor y mucho odio. Sentía que odiaba al mundo entero. Incluso cargaba una pistola dentro del bolso. Yo decía: ‘donde los vea, los mato. Sé que me voy a morir, pero ellos también’. El odio me consumía”, expresa.

Hoy, sus palabras son completamente distintas. *“Un día recibí una llamada para asistir a una audiencia. El funcionario que me citó me pidió que fuera desarmada porque los paramilitares me iban a pedir perdón. Él sabía que yo cargaba un arma y me hizo mostrar el bolso. Me requisaron para asegurarse de que no llevara nada”.*

Allí estaban sentados quienes, según ella, habían destruido a su familia: “Moncholo”, “Jesubito”, “el Oso” y “ZC”.

“Los miré a los ojos. Pensé que solo iban a decir la verdad, pero



Después de décadas de incertidumbre, su mayor acto de valentía ha sido seguir creyendo en la verdad y la memoria.



Sus manos aprendieron a sostener el dolor y la injusticia y, con el tiempo, el perdón.

Más que narrar su dolor, María de Jesús decidió dejar un testimonio para que la desaparición forzada nunca encuentre refugio en el olvido.

fue mucho más que eso. Me pidieron perdón. Empezaron a llorar, me abrazaron y se arrodillaron. Fue impactante. Yo tenía presente la muerte de mi hermano, de mis padres, la desaparición de mi esposo, de mis primos y de mi sobrina. Entonces solo dije: ‘Señor, quita mi cuerpo y coloca el tuyo, porque en mi carne no soy capaz de perdonar, pero en tus manos sí perdono’.

María de Jesús asegura que una fuerza superior le permitió pronunciar aquellas palabras. Dice que perdonó a quienes marcaron para siempre su vida, pero también les recordó que el perdón que realmente necesitaban era el de Dios.

Aunque sostiene que logró liberarse del odio, de la amargura y del resentimiento, hoy le duele ver que aquella familia numerosa y unida quedó dispersa por todo el país para siempre.

Sus hermanos tomaron caminos distintos, huyendo de los lugares donde alguna vez construyeron su hogar y donde el conflicto

terminó arrebatándoles la tranquilidad.

La historia de María de Jesús, más allá de una tragedia personal y familiar, es la historia que demuestra que la desaparición forzada no termina el día en que alguien deja de volver a casa.

Continúa durante años en la incertidumbre de quienes esperan una respuesta, en las mesas donde siempre queda un puesto vacío y en las familias que aprenden a vivir con preguntas que nunca encuentran un cierre.

Aun así, después de perder a cinco de sus seres más queridos, María de Jesús eligió no permitir que el odio permaneciera en su vida. En medio de una historia atravesada por la violencia, decidió que el perdón sería su forma de resistir. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendió que aferrarse a él significaba seguir siendo prisionera de una guerra que ya le había quitado lo suficiente.

El largo camino de Griselda:

del silencio impuesto a la búsqueda de justicia



El relato de *Griselda Molina*^{*} es uno de esos que llevan a preguntarse por qué la gente humilde, honesta y trabajadora tiene que enfrentar tantas injusticias.

Su historia está marcada por la pobreza, la separación familiar, la violencia del conflicto armado, la vulneración de sus derechos y hasta actos que degradan la vida del ser humano.

En Granada, Meta, Griselda abrió su corazón y compartió su historia con el equipo de prensa de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Fue la primera vez que habló de las múltiples violencias que guardó en silencio durante décadas, incluso ocultándolas a sus familiares, a su esposo y a sus hijos.

Nació en Yacopí, el segundo municipio más extenso de Cundinamarca. Sin embargo, la pobreza obligó a sus padres a tomar una decisión que marcaría su vida e infancia para siempre.

Cuando apenas tenía dos años, al no tener las condiciones para sostenerla, fue entregada a un tío paterno que vivía en la vereda Las Palomas, en Puerto Boyacá.

A los seis años volvió a cambiar de hogar. Esta vez quedó al cuidado de una familia con la que creció trabajando en las labores del campo. Recoger caña, alimentar cerdos y realizar distintos oficios hicieron parte de una rutina que la alejó de la escuela.

Griselda guarda en su memoria una infancia dolorosa. Creció lejos de sus padres, sin conocer una tarde de juegos con otros niños, una Navidad en familia o el calor de un hogar propio. Vivió sus primeros años rodeada de personas desconocidas que la obligaban a trabajar desde muy pequeña.

Aunque nunca le faltó lo necesario para sobrevivir, la infancia le fue arrebatada demasiado pronto. Situaciones que, por sí solas, ya constituían una forma de violencia y vulneración de sus derechos.

Sin embargo, lo peor apenas estaba por venir.

(*) La protagonista de la historia pidió que su nombre fuera cambiado por razones de seguridad.

Víctima de violencia sexual

La guerra llegó a la vida de Griselda cuando todavía era una niña.

“Yo digo que era la guerrilla, los grupos armados. Unos hombres que llegaban a las fincas donde había niños y niñas. Nos llevaban en las tardes a unas montañas y nos hablaban de cosas que en ese momento no entendía. Nos explicaban que había gente rica y que tocaba luchar para que hubiera igualdad”, explica Griselda al recordar lo que ocurría en la vereda El Marfil.

Dice que eran situaciones de las que no podía escapar. No había elección. En varias oportunidades, integrantes de grupos armados sacaban a los jóvenes de sus casas para intentar incorporarlos a sus filas mientras les *“lavaban el cerebro”*.

“A los más grandes les daban armas y los ponían a matar ratones de agua mientras los demás niños veíamos”, agrega.

A los 11 años fue víctima de violencia sexual por parte de integrantes de un grupo armado. *“Había como unas ocho niñas. Cuando nos sacaban de nuestras casas nos decían que teníamos que ir con vestido y llevar aparte unos calzones porque nos llevaban de un día para otro. A todas nos violaron y nos prohibían contar lo que nos habían hecho. Era una crueldad”, dice.*

Aquellas niñas inocentes tuvieron que guardar silencio bajo amenazas.

En medio del caos, de las preguntas sin respuesta y del cuerpo maltratado de una niña de 11 años, apareció una oportunidad para huir de ese lugar.

Griselda se trasladó a Puerto Boyacá para trabajar en una casa de familia. *“Llegué a la casa de una señora llamada Rubiela, que me enseñó muchos oficios y otros trabajos del campo. Me pagaba como dos pesos mensuales, con los que pude empezar a ayudar a mi mamá”.*

Por primera vez, su trabajo representó algo más que una obligación y se convirtió en la posibilidad de tenderle una mano a su familia.

A los 16 años decidió regresar a la vereda Las Palomas. Le aseguraron que se había convertido en un lugar más seguro gracias a la presencia permanente del Ejército Nacional.

Allí empezó a cultivar yuca, una actividad que con el tiempo le permitió comprar un pequeño pedazo de tierra. Aquel terreno fue el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y trabajo honrado por parte de Griselda, quien sostiene: *“Yo pagué con trabajo mi tierra”*.

Sin embargo, regresar a Las Palomas terminó convirtiéndose en una mala decisión, pues la guerra y la violencia nuevamente marcaron sus días.



Griselda Molina comparte por primera vez una historia que permaneció en silencio durante más de tres décadas.

Volvió la guerra

La tranquilidad duró poco. Aunque la presencia del Ejército Nacional les había hecho creer a los habitantes de Las Palomas que podían estar protegidos, la guerra volvió a instalarse en la vereda.

“Ahí fue donde otra vez volvió la guerra. Los grupos armados les pedían comida y mercado a las familias y no había forma de decir que no”, recuerda.

Con el paso del tiempo, la presencia militar también empezó a transformar la vida cotidiana de los campesinos.

Cuenta Griselda, que, en una vereda cercana, el Ejército instaló un batallón y carnetizó a todos los habitantes de la zona. A partir de ese momento, la rutina de las familias quedó bajo estricta vigilancia.

“Nos tocaba ir cada ocho días a firmar ese carné. La persona que no iba, de inmediato la señalaban o la tildaban de que estaba del lado de la guerrilla. Entonces teníamos, como fuera, que ir cada ocho días”, agrega. “Además, el Ejército nos controlaba la comida

y revisaba el mercado de acuerdo con el número de personas que vivían en la casa”, añade.

Son muchos los episodios negativos los que Griselda conserva en la memoria de aquellos años entre las distintas veredas de Puerto Boyacá. Masacres, enfrentamientos, injusticias y cuerpos abandonados al borde de los caminos hacían parte de un paisaje que ningún ser humano debería acostumbrarse a ver.

“Un día iba por la carretera entre El Marfil y Puerto Boyacá, sobre la vía que conduce a Cimitarra, Santander, y recuerdo que veía a muchos muertos, de lado y lado de la carretera; un cuerpo por aquí, otro por allá, en la orilla”, relata.

Suspira mientras continúa el relato. *“Había un sitio que llamaban El Salto. Ahí llevaban a las personas y las tiraban a un abismo. Por allá ni los chulos bajaban. Uno iba en el carro de línea y se daba cuenta de todo, pero nos tocaba seguir derecho, sin mirar mucho, para no ser un cuerpo más de esos que tiraban”.*



Víctima del Ejército

Quienes tenían la misión de proteger a la población civil de la violencia, también terminaron sembrando miedo, especialmente entre las mujeres campesinas. Por eso Griselda no pudo escapar de las manos despiadadas de algunos integrantes del Ejército.

Por esos días, un brote de paludismo afectó a varias personas de la región. *“Me dio una fiebre horrible. Me sentía muy mal, el cuerpo no me respondía, no podía ni caminar. Pero un domingo, aun en medio de mis dolencias, me tocó ir a firmar el carné al batallón porque, si no, había castigos”.*

Según relata, a los hombres que incumplían con esa obligación los encerraban en una especie de hueco rodeado con alambre de púas. A las mujeres las obligaban a pasar horas pegando botones en los uniformes de los soldados.

Pero ese domingo el castigo para ella fue mucho peor. *“Llegué*

muy enferma. Le dije a uno de los del Ejército que me sentía muy mal y él me dijo que me iba a aplicar una inyección para que mejorara”.

Griselda aceptó, confió en que recibiría ayuda. *“El tipo me llevó a una camilla, me aplicó algo; no supe qué era. Me quedé medio dormida, es lo único que recuerdo. Cuando reaccioné estaba sin ropa”*, sostiene.

“Cuidadito va a abrir la boca. Donde usted llegue y abra la boca, se muere”, fueron las palabras amenazantes que recuerda Griselda de aquel domingo que desearía borrar de su memoria. *“¿Quién iba a hablar después de semejante amenaza, sabiendo que era capaz de cumplirla?”.*

Hasta hoy, esa historia sigue siendo un secreto. *“Solo Dios sabe todo esto. A nadie de mi familia le he contado”*, advierte.



Perdió un sueño

Pero la violencia parecía que no quería salir de la vida de Griselda. Poco tiempo después, la guerrilla les dio a todas las familias de la vereda Las Palomas un plazo de 24 horas para abandonar sus tierras.

No hubo tiempo para despedidas ni para recoger una vida construida durante años. Solo para huir. *“Me tocó dejar la territa*

que tanto me costó conseguir, la que tanto añoro hoy en día. Allí sembré muchos sueños”.

No solo perdió una propiedad. Perdió el fruto de años de trabajo, el lugar donde había imaginado reconstruir su vida y la posibilidad de echar raíces después de una infancia marcada por el abandono y la violencia. Y fue así como la guerra volvió a arrebatarlo todo.

Un sueño que la guerra no pudo arrancar

Después del desplazamiento, Griselda tuvo que empezar de nuevo, una vez más.

Formó una familia y fue madre de cuatro hijos junto a un hombre mucho mayor que ella que, en su totalidad, asumió las cargas económicas del hogar.

Sin embargo, la violencia no solo fue la del conflicto armado. También se instaló en su vivienda, la misma que debería ser un lugar seguro. Fue víctima de maltrato físico y verbal durante varios años, hasta que logró escapar de esa relación.

Con el tiempo, la vida le dio una nueva oportunidad. Encontró a un hombre que, contrario a quienes habían marcado su historia con el miedo, supo cuidarla, respetarla y devolverle la tranquilidad que durante tantos años le fue arrebatada.

Hoy todos viven juntos en Granada. Allí, por primera vez, Griselda encontró la fuerza para contar una historia que permaneció en silencio más de tres décadas. Habló desde el corazón, en medio de una serie de actividades de desarrollo personal que la impulsaron a seguir luchando por sus sueños.

A pesar de haber sido víctima de grupos armados ilegales y de

integrantes del Ejército Nacional, hoy Griselda solo está reconocida por el Estado como víctima de desplazamiento forzado, porque fueron esos los únicos hechos sobre los que tuvo el valor de declarar.

Las demás violencias permanecieron ocultas bajo el peso del miedo, la vergüenza y las amenazas.

Solo ahora decidió romper ese silencio para que las autoridades puedan reconocerla también como víctima de violencia sexual e iniciar el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación.

Mientras ese momento llega, continúa aferrada a un sueño que para muchos podría parecer sencillo, pero que para ella representa toda una vida. *“Yo quisiera que el Estado me diera un pedacito de tierra donde yo pueda volver a mis sueños. Que me regresen mi tierra porque aún me siento con vitalidad para trabajarla”.*

Griselda no habla de dinero. Tampoco habla de riquezas. Ella solo anhela volver a sembrar, porque la tierra fue el primer lugar donde sintió que podía construir un futuro con sus propias manos.

Allí sembró yuca, pero también sembró esperanza. Allí descubrió que el trabajo honrado podía darle algo que nunca había tenido y era la posibilidad de sentir que algo le pertenecía.





Las manos con las que un día sembró la tierra que la guerra le arrebató siguen aferradas al sueño de volver a cultivarla.

Perdonar, su próxima meta

Hoy, cuando recuerda todo lo vivido, reconoce que sanar ha sido uno de los caminos más difíciles que le ha tocado recorrer. *“Es difícil perdonar a quienes no tuvieron compasión conmigo, a quienes no tuvieron compasión de una niña. No he sanado mis heridas. Me falta perdonar. Sigo con recuerdos que me martillan la cabeza. Quiero llegar al punto del perdón. No lo he logrado, pero tengo fe”*.

Griselda Molina, a pesar de las injusticias que llegaron sin pausa a su vida, una tras otra, sigue creyendo en que llegará el momento en que nuevamente podrá sembrar sus sueños en su propia tierra.

LAS OTRAS VÍCTIMAS

*“Somos personas
que aún estamos
por allá en el olvido”*

*Ejercicio cartográfico para la ubicación de territorios
del Valle olvidados en los mapas.*

Hay territorios excluidos de la imagen, silenciados en los mapas, invisibles en la memoria. Muchos de ellos resguardan comunidades étnicas e indígenas y, quizás también, campesinas.

“Ser campesino es identificarnos desde la tierra, desde la agricultura, desde el ser propio de llevar esa identidad. Nos basamos en los mayores que nos enseñan a labrar la tierra y a defenderla cada día más”, dice Sebastián Truchas Arias, líder campesino de la Junta de Acción Comunal de Florida.

En Cali, el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA-JEP se reunió con 19 juntas de acción comunal y organizaciones campesinas para realizar una evaluación de su nivel de riesgo con un enfoque de seguridad humana.

Es la primera vez que una evaluación de este tipo se realiza con juntas de acción comunal y organizaciones campesinas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.

Dentro de las actividades propuestas, las juntas debían reconocerse y ubicarse dentro de una cartografía. Y ahí, sobre el papel, apareció una pregunta que parece simple pero no lo es: ¿Cómo te ubicas en un mapa que nunca te ha nombrado?

Porque el mapa miente. No es un espejo del mundo, es una decisión. Groenlandia, en la imagen que todos aprendimos a leer desde niños, parece del mismo tamaño que África. La realidad es que África es como 14 veces más grande. Y ese

círculo que llamamos mapamundi, esa manera de dibujar la Tierra siempre con Europa y Norteamérica arriba y todo lo demás abajo, tampoco es un accidente: es una convención que durante siglos dijo, sin decirlo, quién importa y quién no.

Los países cercanos al ecuador —los de África, o la misma Colombia— siempre terminan más pequeños de lo que son. Más chicos, más lejos, más al margen.

Así que no es extraño que en Colombia haya lugares tan olvidados que ni siquiera le hacen trampa a esta lógica: simplemente no existen en el mapa. Y si no existes en el mapa, ¿cómo empiezas un proceso de reconocimiento y reparación? ¿Cómo le explicas al Estado el daño que te hizo en un lugar que, para el Estado, no está en ninguna parte?

Reconocerse ahí, aunque sea sobre una hoja de papel, es ya un primer acto de existir.

El Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA-JEP llegó a Cali a proponer un ejercicio para la comprensión territorial de la seguridad humana.

“El ejercicio partió de una premisa fundamental: la protección no puede entenderse únicamente desde coordenadas administrativas generales, sino desde la forma concreta en que las comunidades habitan, recorren, nombran y reconocen su propio territorio”, dice Francisco Campos, funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación.

Sobre un papel, los asistentes empezaban a buscar milimétricamente el punto donde podrían, quizás, estar ubicados. Tomaban referencias conocidas —otros pueblos, ciudades o destinos turísticos que sí han sido visitados por otros cuerpos o, por lo menos, por otros lectores que se enfrentan al mapa—.

Con esta información, el grupo de protección iba nutriendo una cartografía que, poco a poco, trazaba una realidad en la que ellos aparecían. Esto no solo con la intención de nombrarlos y ubicarlos en la imagen común del país, sino con la idea de que señalar el lugar es fundamental para el análisis del riesgo en lugares marcados por el conflicto.

No fue un ejercicio sencillo: para algunos era fácil, para otros era imposible identificarse en una hoja en la que nunca antes habían sido registrados.

“El campesino siempre ha estado como por allá en el último rincón. Ahorita supuestamente tenemos un reconocimiento, tenemos una legislación que fue la que nos reconoció como campesinos, y estamos dentro de la Constitución Política de Colombia”, opina Jaqueline Gutiérrez Valencia, lideresa de la Junta de Acción Comunal del Líbano.

“Pero —advirtió Valencia— lastimosamente, para las entidades gubernamentales, no aparecemos. Así estemos allí, tengamos un capítulo, no somos visibles. Somos personas que aún estamos por allá en el olvido”.

El conflicto ha impactado desde muchos lugares la vida de las comunidades campesinas. Comparten un miedo a salir, a aparecer, a ser identificados —o mal identificados—.

A muchos los han confundido con guerrilleros o integrantes de grupos armados al margen de la ley, algo que —advierte Jaqueline— puede deberse a su ropa del día a día: poncho, ruana, botas de pantano, machete y otras herramientas de su trabajo que también usan esos grupos armados.

En el Líbano, Florida, hay cambios que marcan una línea clara entre el antes y el después del conflicto: imágenes precisas de las consecuencias que deja la guerra en territorios que no son visibles. Antes tenía puesto de salud y de policía. Ninguno funciona ahora. Era corregimiento y hoy es vereda. Las vías están en condiciones pésimas para sacar sus productos, lo que los excluye aún más de la vida fuera de su territorio. Los jóvenes se van porque temen al reclutamiento. Las familias los sacan para evitar el dolor de una pérdida. Hay viviendas vacías, miedo de compartir y de volver a casa en la noche. Las tradiciones se volvieron hechos esporádicos.

En Colombia hay campesinos que luchan por la vida, el campo, el territorio y la naturaleza. Ubicarlos en el mapa es necesario para tejer comunidad y construir una memoria desde el cuidado.

Porque ese ejercicio de dibujar sobre un papel, aunque parezca modesto, terminó siendo algo más grande: un puente entre dos formas de conocer el territorio. Por un lado, el análisis técnico, con sus coordenadas y sus protocolos de riesgo. Por el otro, el saber de quienes han caminado ese territorio toda su vida —quienes conocen la trocha que se vuelve intransitable en invierno, la casa que quedó vacía después de una amenaza, el punto exacto donde ya no se puede pasar de noche. Ese conocimiento casi nunca cabe en un informe. Se queda disperso, guardado en la memoria de quien lo vivió.



Juntas de acción comunal y organizaciones campesinas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca

Al ponerlo sobre un mapa, ese saber disperso empezó a tomar forma. Aparecieron patrones que antes nadie había trazado juntos: recorridos, afectaciones, relaciones entre veredas que el papeleo institucional nunca había conectado. La cartografía dejó de ser solo una técnica y se convirtió en otra cosa: una manera de escuchar. Un ejercicio de reconocimiento que le permitió a la institucionalidad acercarse, por una vez, a la experiencia real de estas comunidades —no la que aparece en los documentos, sino la que se vive todos los días en el norte del Cauca y el sur del Valle.

Porque si algo quedó claro en esa jornada es que no basta con que el Estado tenga un capítulo dedicado a los campesinos en la Constitución. Hace falta que los vea. Que los ubique. Que entienda, aunque sea a través de un dibujo hecho a mano sobre una hoja en blanco, que ahí, en ese punto que antes era solo un vacío en el mapa, hay una vida entera —y un riesgo real— esperando para ser reconocidos.

Cuando la fuerza de la palabra se convierte en abrazo

Tres territorios, 113 historias y un mismo latido: continúa la fuerza de las víctimas para reconstruir el tejido social

Hay lugares donde el dolor parece haber echado raíces. Donde el silencio pesa más que las palabras. Donde mirar atrás duele, pero mirar adelante asusta. Y, sin embargo, en medio de esas geografías marcadas por la ausencia, hay personas que deciden encontrarse. Que deciden hablar. Que deciden, contra todo pronóstico, seguir creyendo en la posibilidad de un mañana diferente.

Durante los meses de abril, mayo y junio de este 2026, tres municipios colombianos —Yopal, Cúcuta y Granada— fueron testigos de algo que va más allá de lo institucional. Fueron testigos de vida de esa fuerza quieta pero imparable que tienen las víctimas del conflicto armado en Colombia cuando se sienten en un lugar seguro para contar lo que duele, pero también para fortalecer la energía con la que se mueven sus propios sueños.





Cierre del Encuentro Territorial de Participación Social en Yopal. Cuando las manos se unen y las historias se encuentran, nacen aprendizajes que permanecen. La fuerza de lo colectivo, la integración y la esperanza fueron el mejor cierre para un camino recorrido en comunidad.

Más que una reunión institucional: un respiro

Imaginen llegar a un salón con el corazón encogido, con la memoria a flor de piel, con la desconfianza como escudo. Imaginen sentarse frente a personas que representan una institución, y en lugar de encontrarse con formalismos y papeles, encontrarse con miradas que escuchan, con silencios que acompañan, con gestos que dicen “estamos aquí para caminar juntos”.

Eso es lo que ocurre en los Encuentros Territoriales de Participación Social organizados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz. No son simples reuniones informativas. Son, ante todo, espacios donde el alma puede respirar.

En **Yopal**, la comunidad pidió expresamente que se realizara un segundo encuentro. Porque el primero les había devuelto algo que el conflicto les arrebató: la certeza

de que su voz importa. La confianza, esa construcción tan frágil como esencial, comenzó a tejerse nuevamente entre palabras compartidas y necesidades expresadas en voz alta.

En **Cúcuta**, la calidez humana desbordó las expectativas. Las víctimas no solo asistieron; participaron activamente, tejieron redes, solicitaron continuidad. Porque cuando una persona que ha perdido tanto encuentra un espacio donde su historia es recibida con respeto y sin juicios, algo en su interior comienza a recomponerse.

Y en **Granada, Meta**, el encuentro tuvo un sabor especial: el de la perseverancia. A pesar de las distancias geográficas, las dificultades de movilidad y las sombras de la inseguridad, 40 personas dijeron presente. Llegaron para recordarle al país que el conflicto no es un asunto del pasado, que las heridas siguen abiertas, pero también para demostrar que la esperanza no se rinde ante las adversidades.



Encuentro Territorial de Participación Social en Yopal. Allí, las víctimas resignifican sus cicatrices a través del trabajo colectivo, transformando la memoria en un camino de encuentro, dignidad y esperanza. Porque recordar también es una forma de sanar y de tejer futuro.

YOPAL



Tejedoras de sueños en Yopal. A través del arte del Kintsugi, abrazan sus historias y resignifican sus cicatrices. Como la cerámica que renace con vetas de oro, descubren que las heridas, cuando sanan con amor y memoria, no ocultan su belleza: la revelan, convirtiéndose en el testimonio más luminoso de su fortaleza y resiliencia.

Don Januario Cachay Cruz (con chaleco azul) participó en el Encuentro Territorial de Participación Social en Yopal el 11 de abril pasado. “Creo que a todos los que estamos acá nos llegó un instante en el que nos sentimos morir”, dijo durante su intervención. Un par de horas después, un accidente de tránsito en la capital de Casanare se lo llevó de este mundo junto a su hija. ¡Su recuerdo vivirá!

El alma también necesita cuidados

Hay un detalle que marca la diferencia en estos encuentros: el acompañamiento psicosocial. Y es que no se puede hablar de participación sin hablar de protección emocional. Para muchas de estas personas, hablar de lo ocurrido significa revivir el día en que un ser querido desapareció, en que tuvieron que huir de su tierra, en que su cuerpo fue violentado, en que su proyecto de vida se truncó.

El equipo que acompaña la implementación de la iniciativa de Participación Social liderada por la UIA está presente, no como observador distante, sino como un puente sensible entre el dolor y la posibilidad de seguir adelante. Mediante escucha activa, contención emocional y acompañamiento

oportuno, los profesionales van identificando afectaciones que muchas veces permanecen ocultas: tristeza profunda, miedo paralizante, incertidumbre sobre el futuro, angustia que aprieta el pecho, rabia contenida, dolor que no termina de cicatrizar.

Pero también se encontró en los eventos de este segundo trimestre del 2026 algo muy valioso: la resiliencia colectiva que florece en medio del desierto. Organizaciones de víctimas que se fortalecen mutuamente, redes familiares y comunitarias que se convierten en sostén, espiritualidad que alimenta el alma, liderazgos sociales que iluminan caminos, emprendimientos que reconstruyen proyectos de vida, prácticas de autocuidado que recuerdan que, a pesar de todo, la vida merece celebrarse.

Quando la institución aprende a escuchar

Estos encuentros no solo transformaron a las víctimas; también transformaron a la institucionalidad. Porque escuchar de verdad, sin prisa, sin interrupciones, permite comprender que el conflicto armado no es una estadística, sino una experiencia que atraviesa cada fibra del ser humano: las relaciones familiares, la confianza en el vecino, la capacidad de soñar con un futuro, el vínculo con las instituciones.

La Unidad de Investigación y Acusación - UIA de la JEP recogió aprendizajes valiosos que van más allá del protocolo: la importancia de responder con sensibilidad ante las activaciones emocionales, la necesidad de articular rutas de atención claras, el valor de cuidar tanto a las víctimas como a los equipos profesionales que las acompañan. Porque para sanar heridas ajenas, también hay que cuidar el propio corazón.



En el Encuentro Territorial de Participación Social de Cúcuta, Norte de Santander, las mujeres víctimas aprovecharon este espacio para encender la memoria de sus seres queridos. Entre velas, fotografías y silencios compartidos, honraron sus ausencias y reafirmaron la fuerza de quienes continúan buscando con esperanza, verdad y dignidad.

En el Encuentro Territorial de Participación Social en Cúcuta, el reconocimiento simbólico entregado en el marco de los talleres de prevención y autoprotección colectiva destacó el compromiso y la participación activa de las víctimas.

CÚCUTA



En cada encuentro, la palabra encuentra un lugar para unir saberes y memorias. En el Entepaso de Cúcuta, el diálogo fortaleció el tejido étnico, honrando la diversidad, las diferencias y la riqueza de la cultura ancestral.

La paz se construye con conversaciones que incluyen

Al final, estos encuentros en Yopal, Cúcuta y Granada en Meta, nos recuerdan algo fundamental: la paz no es un concepto abstracto ni un acuerdo firmado en una mesa distante. La paz se construye en el día a día, en la palabra compartida, en el reconocimiento mutuo, **en la posibilidad de incluir en el camino a las voces, no solamente de víctimas y organizaciones que han destacado y son ya, muy reconocidas por las mismas instituciones, sino de aquellas que, aun cuando han sido y son víctimas del conflicto, todavía la gestión institucional no ha logrado alcanzarlas para decirles “aquí estamos, y su historia importa”.**

Una suma de 113 víctimas que participaron en estos encuentros

del segundo trimestre del año no solo recibieron información institucional. Recibieron algo mucho más valioso: la certeza de que no están solas, de que su voz tiene eco, de que el tejido social —aunque desgarrado— aún puede reconstruirse con hilos de confianza, escucha y dignidad.

Cada encuentro territorial sembró una semilla. Quizás no veremos los árboles mañana, quizás no recogeremos los frutos en esta cosecha. Pero algo está germinando en Yopal, en Cúcuta, en Granada. Algo que se llama esperanza. Y esa, aunque a veces parezca pequeña, es la única fuerza capaz de mover montañas.

Porque las víctimas no son solo pasado; son también presente y, sobre todo, un futuro que se intenta reconstruir hoy, encuentro a encuentro.



GRANADA - META

En el Encuentro Territorial de Participación Social en Granada, Meta, las participantes encontraron un refugio para la palabra y el corazón. Alrededor de la luz compartieron un momento profundamente simbólico. Porque incluso después de la oscuridad, siempre hay una luz capaz de reunir, sanar y abrir caminos hacia el porvenir.

Más allá de las distancias y las dificultades, en Granada, Meta, la esperanza encontró el camino para reunir a las comunidades. En cada encuentro florecieron la participación, el diálogo y la fuerza de lo colectivo, recordándonos que, cuando las voces se unen, también se tejen puentes que acercan corazones y construyen futuros compartidos.



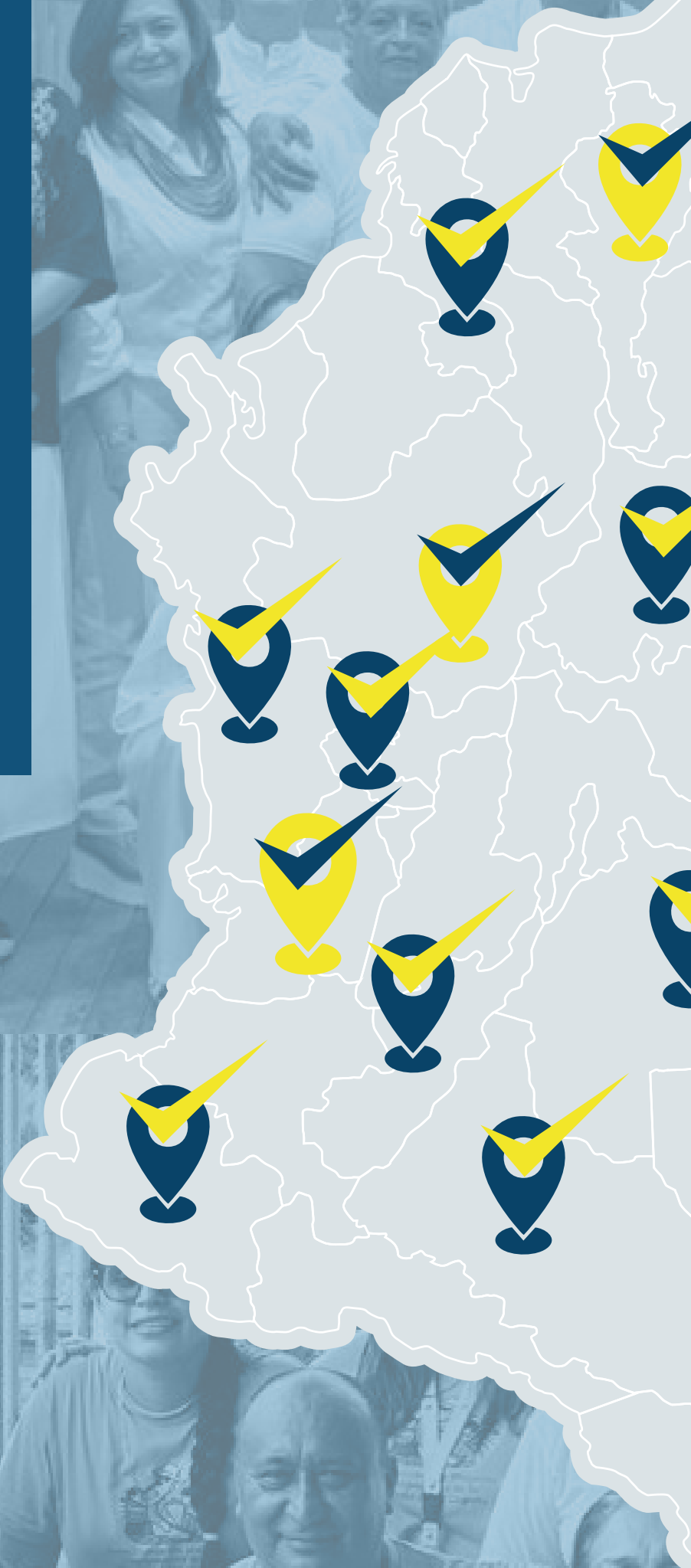


En el Encuentro de Participación Social en Granada, Meta, la palabra encontró un refugio donde pudo florecer. Allí, las víctimas alzaron su voz y hallaron oídos dispuestos a escuchar con respeto, reconociendo que cada relato guarda la fuerza de la memoria, la dignidad y la esperanza de un futuro compartido.



Construcción del Árbol de las Restauraciones, tejido con las manos, las voces y las esperanzas de quienes participaron en la jornada de Entepaso en Granada, Meta. Cada hoja florece como un testimonio vivo, resguardando mensajes, compromisos y reflexiones que nacieron del encuentro, donde la palabra sembró confianza, la memoria echó raíces y el anhelo de restaurar la vida encontró un camino compartido.

De nuevo les cumplimos a las regiones



Los grupos territoriales de la Unidad de Investigación y Acusación, durante el segundo trimestre de 2026, fortalecieron los vínculos con las víctimas del conflicto armado, la academia y las entidades regionales.

Durante ese período -desde los territorios- se consolidó el trabajo por un país libre de violencia y se reafirmó el compromiso de la UIA con la construcción de paz y la garantía de los derechos de las víctimas.

Bucaramanga

En Puerto Parra, Santander, en el centro poblado de Campo Capote, la Fiscal territorial de la UIA en Bucaramanga participó en el lanzamiento de la ‘Agenda Territorial de Reincorporación Comunitaria’ liderada por la Gobernación de Santander y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Durante la jornada se realizaron espacios de diálogo con firmantes de paz y la población, lo que permitió que los niños y las niñas de la comunidad, junto con los hijos de la paz, vivieran un momento

significativo y especial.

Adicionalmente, la fiscal, en compañía de la líder del Grupo de Apoyo Técnico Forense, asistió a la mesa anual de los “Estándares para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”.

Este espacio reconoció el rol fundamental que cumplen las entidades convocadas en los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos.



Fiscal de la UIA en Bucaramanga en el lanzamiento de la ‘Agenda Territorial de Reincorporación Comunitaria’



Fiscal de la UIA y líder del Grupo de Apoyo Técnico Forense en la mesa anual de los Estándares para la Búsqueda de Personas Desaparecidas



Cali

En el marco de la medida cautelar del caso 05 de la JEP, Edgar Omar Villamizar, fiscal territorial en Santiago de Cali, se reunió con líderes y lideresas indígenas del Norte del Cauca y Sur del Valle, representantes judiciales del CRIC y las Mujeres Buscadoras de Caldon.

El encuentro no fue una reunión más de protocolo: fue un momento en que la institucionalidad y las comunidades trazaron juntas una ruta concreta de exhumaciones en páramos de niebla perpetua, resguardos entre montañas y cañadas y caminos que solo las comunidades conocen.



Edgar Villamizar, fiscal territorial se reunió con líderes y lideresas indígenas del Norte del Cauca y Sur del Valle, representantes judiciales del CRIC, y las Mujeres Buscadoras de Caldon



Florencia

Henry Wilson Montenegro, fiscal (e) de la sede territorial en Florencia, se reunió con Camilo Penagos Pacheco, director de la cárcel El Cunduy.

Unidad y los casos que adelanta la JEP.

De igual forma, se expuso la importancia de trabajar de manera articulada para el cumplimiento de los objetivos de la Jurisdicción.

En la reunión se abordaron temas relacionados con la misionalidad de la



Henry Wilson Montenegro, fiscal (e) de la sede territorial en Florencia y Camilo Penagos Pacheco, director de la cárcel El Cunduy.



Neiva

Rosabel Flórez, fiscal de la UIA en Neiva, participó como expositora en una actividad académica de la Universidad Surcolombiana y en una jornada de capacitación dirigida a mediadores de seguridad y convivencia ciudadana.

En su intervención ahondó en conceptos como el de la justicia restaurativa y la justicia transicional y explicó

cuál es la función de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Investigación y Acusación.

También hizo parte del homenaje en memoria de las y los servidores judiciales víctimas del conflicto armado en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.



Fiscal territorial en la Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado



Rosabel Flórez, fiscal de la UIA en Neiva en actividad académica de la Universidad Surcolombiana



Fiscal en Neiva participó como ponente en jornada de capacitación de la Gobernación del Huila

Pasto

El equipo del grupo territorial en Pasto acompañó el evento “En respuesta a las víctimas la SAE entrega casa a Gobernación de Nariño y a la JEP”.

En la actividad, en la que participó Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial

para la Paz, y Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó un espacio para fortalecer procesos de memoria y reparación de víctimas.

Fiscal en Pasto y su equipo de trabajo con el Presidente de la JEP en la entrega de casa a favor de la memoria de las víctimas



Pereira

Henry Anibal Romaña, fiscal (e) del grupo territorial de la UIA en Pereira, sostuvo varias reuniones de relacionamiento en las que presentó la oferta institucional de la Unidad, fortaleció los canales de comunicación y coordinó diferentes actividades en el territorio en pro de las víctimas.

Durante el trimestre se reunió con Juan Miguel Galvis, gobernador del departamento de Quindío; con los personeros de los municipios de Risaralda y también de las localidades caldenses de Palestina, Anserma, Filadelfia, Neira, Riosucio y Marulanda, y con la Asociación Nacional de Mujeres

Afrodescendientes Guadalupe Zapata.

Asimismo, acompañó diferentes actividades como el Foro Interinstitucional “Retos contemporáneos y procesos de transformación en la justicia penal”; el evento “Cierre de la tercera fase de diálogos transformadores con policías víctimas del conflicto armado interno” y la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad.

Finalmente, acompañó la entrega digna de Iván Trejos, diligencia ordenada por el auto 391 proferido por María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP.



Fiscal territorial en reunión con lideresas de la Asociación Nacional de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata



Fiscal (e) de la sede territorial de la UIA en Pereira en el Foro Interinstitucional Retos contemporáneos y procesos de transformación en la justicia penal



Fiscal (e) en Pereira en reunión con personeros de diferentes municipios del departamento de Caldas



Equipo de la UIA en la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad en la Universidad Libre



Henry Anibal Romaña, fiscal (e) de la sede territorial en Pereira en entrega digna en Quinchía, Risaralda



Henry Anibal Romaña, fiscal (e) del grupo territorial de la UIA en Pereira con Juan Miguel Galvis, gobernador del departamento de Quindío.



Fiscal (e) de la UIA en Pereira en el evento “Cierre de la tercera fase de diálogos transformadores con policías víctimas del conflicto armado interno”

Quibdó

El equipo territorial de la UIA en Quibdó, liderado por la fiscal Diana Mosquera, trabajó en varias estrategias y alianzas (con organizaciones de la sociedad civil e instituciones) que tuvieron como objetivo aportar a la reconstrucción del tejido social y llegar a más víctimas en el territorio para que su participación en la JEP se materialice.

También se sumó a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y el Día de la Afrocolombianidad.

Las jornadas incluyeron un componente cultural en el que a través de obras de teatro se representaron las vivencias, memorias y resistencias de las víctimas.



Equipo de la UIA en Quibdó en la Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado



Puesta en escena de obra de teatro en la Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado



Fiscal de la UIA en Quibdó en la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad



Fiscal de la UIA en Quibdó en reuniones en pro de las víctimas y de la reconstrucción del tejido social



San José del Guaviare

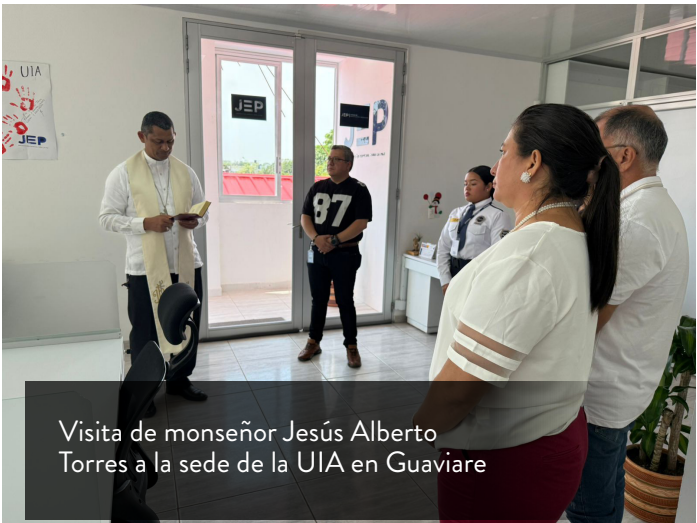
Con el objetivo de fortalecer el relacionamiento institucional, Cristiam Alfonso Viviescas, fiscal territorial en Guaviare, se reunió con el coronel Henry Alexander Leal, comandante de la Policía en ese departamento; con Juan David Mendoza, delegado departamental de la Registraduría; con el coronel Juan Manuel Rueda Trujillo, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 32, y con el coronel Jairo Rincón, inspector de la Armada y delegado del Comando General para la Cuarta División y el Comando Aéreo de Combate No. 2.

De la misma manera, y teniendo en cuenta la pluralidad de etnias en la región, tuvo su primer acercamiento con las comunidades indígenas y se reunió con Yuber González Rodríguez, líder indígena y representante legal del resguardo indígena Morichal Viejo.

En los diferentes espacios socializó la misionalidad de la Unidad de Investigación y Acusación y de la Jurisdicción Especial para la Paz y destacó la importancia de la cooperación institucional para el desarrollo de las actividades encomendadas.

Adicionalmente, se unió a la conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y acompañó a Edisabel Mena Murillo, coordinadora regional de la Defensoría del Pueblo, en la verificación del estado del cementerio municipal de San José del Guaviare.

Para finalizar, y en el marco de la Semana Mayor, monseñor Jesús Alberto Torres Ariza, obispo de la Diócesis de San José del Guaviare, bendijo la sede territorial.



Visita de monseñor Jesús Alberto Torres a la sede de la UIA en Guaviare



Fiscal territorial en la Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado



Fiscal de la UIA en el Guaviare, se reunió con Yuber González Rodríguez, líder indígena y representante legal del resguardo indígena Morichal Viejo.



Cristiam Alfonso Viviescas, fiscal de la UIA en el Guaviare con Edisabel Mena, coordinadora regional de la Defensoría del Pueblo en visita al cementerio municipal de San José del Guaviare.



Cristiam Alfonso Viviescas, fiscal territorial en Guaviare y el coronel Henry Alexander Leal, comandante de la Policía en el departamento



Encuentro con organizaciones indígenas en San José de Guaviare



Cristiam Isnardo Alfonso, fiscal de la UIA en el Guaviare con Juan David Mendoza, delegado departamental de la Registraduría.



Fiscal en San José del Guaviare con el Comandante y el Inspector de la Armada Nacional



Sincelejo

María Bernarda Díaz, fiscal territorial en Sincelejo, acompañó la jornada académica ‘Socialización de los Macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz’, organizada por estudiantes de séptimo semestre del curso de justicia transicional del programa de derecho de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR.

El espacio tuvo como propósito promover el análisis y la reflexión crítica sobre los casos investigados por la JEP, los patrones de violencia en el marco del conflicto armado y los avances en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Asimismo, los desafíos que enfrenta la justicia transicional en la construcción de paz.



María Bernarda Díaz, fiscal territorial en Sincelejo en la jornada académica Socialización de los Macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz

Turbo

En cumplimiento a la medida cautelar sobre los cementerios de Carepa y Mutatá, Antioquia, Lázaro Vivero, fiscal de la UIA en Turbo, acompañó al Grupo de Apoyo Técnico Forense a una diligencia de prospección y exhumación en el cementerio Mutatá.

Sumado a lo anterior, su equipo de trabajo participó en la jornada conmemorativa del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.



Equipo de la UIA en Turbo en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado



Fiscal territorial en Turbo acompañó diligencia de prospección y exhumación en Mutatá

Valledupar

Jerry de Jesús Garavito, fiscal de la UIA en Valledupar, fue invitado a diferentes eventos para hablar sobre los logros, desafíos y el impacto de la JEP en el territorio.

Durante el segundo trimestre del año participó en un espacio convocado por el colectivo de comunicaciones La Tertulia; en el encuentro “Jóvenes por la paz en La Mesa, Cesar”, organizado por el programa Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y en el conversatorio “Reconocer o negar: El pulso de la responsabilidad ante

la justicia transicional”, que se desarrolló en el marco de la cuarta edición de la Feria del Libro, organizada por el diario El Pílon y la Alcaldía de la capital del Cesar.

Asimismo, lideró una actividad de interlocución denominada “Paz, Justicia y Reincorporación” y asistió a una reunión que tuvo como objetivo presentar los retos de la presencia territorial de la JEP, a partir del contexto de riesgo y seguridad en la región liderada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.





Fiscal participa en encuentro con víctimas en Villavicencio



Fiscal territorial en la Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado



El Grupo territorial de la UIA en Villavicencio en la primera Mesa Departamental de Desaparición Forzada

Villavicencio

En la vereda Las Mercedes de Villavicencio, Ayda Luz Acosta, fiscal de la UIA en esta zona del país, participó en una significativa jornada en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

En el espacio se honró la memoria de las víctimas, se reflexionó sobre las consecuencias del conflicto armado y se fortaleció el vínculo de reconciliación entre las comunidades.

Igualmente, el grupo de trabajo de la UIA en el territorio participó en la primera Mesa Departamental de Desaparición Forzada liderada por la Gobernación del Meta, encuentro en el que se avanzó en la construcción de una agenda estratégica territorial de búsqueda y en acciones orientadas a la dignificación de la memoria de las víctimas.

Yopal

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y de promover acciones encaminadas a la atención, acompañamiento y garantía de los derechos de las víctimas en el territorio, Jaime Enrique Alario, fiscal de la UIA en Yopal, sostuvo una reunión de articulación con Nelson Enrique Camacho, alcalde de Aguazul, Casanare, y con Andrés Camilo Forero, enlace de víctimas de la misma alcaldía.

Asimismo, participó en un evento conmemorativo del 9 de abril convocado por la Gobernación del departamento y en el X Encuentro Departamental sobre Desaparición Forzada en el Marco del Conflicto

armado, liderado por la Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida.

Además, organizó el encuentro “Restaurando confianza con la ciudadanía en Casanare”, que tuvo como propósito fortalecer el diálogo entre la Jurisdicción Especial para la Paz y los actores institucionales y comunitarios del departamento.

Por último, en articulación con el Grupo de Protección y el Equipo de Prevención, acompañó un taller de valoración del riesgo dirigido a la asociación CASAPAZ, organización que hace parte del Caso 03 (subcaso Casanare).



Fiscal de la UIA en Yopal acompaña el taller de valoración del riesgo dirigido a la asociación CASAPAZ



Fiscal territorial en la Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado



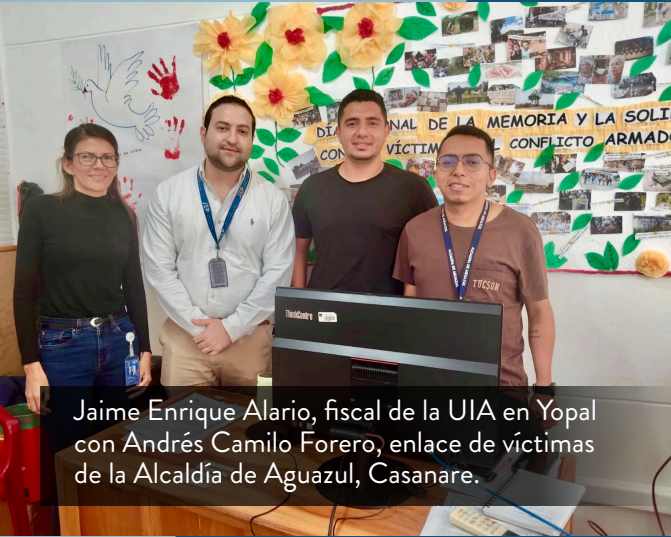
Encuentro Restaurando confianza con la ciudadanía en Casanare



Jaime Enrique Alario, fiscal de la sede territorial en Yopal con Nelson Enrique Camacho, alcalde de Aguazul, Casanare.



Jaime Enrique Alario Sierra, fiscal de la sede territorial en Yopal en el X Encuentro Departamental sobre Desaparición Forzada en el marco del Conflicto armado



Jaime Enrique Alario, fiscal de la UIA en Yopal con Andrés Camilo Forero, enlace de víctimas de la Alcaldía de Aguazul, Casanare.

En línea con la

UNIDAD

*de Investigación
y Acusación*

Revista Virtual